

En Madrid...	10 rs.	30 rs.
En provincias...	12	34
En el extranjero...	24	64
En la Antillas...		100
En Filipinas...		

Se admiten las atenciones del periódico no lo impidan, se admitirán remitidos y comunicados a precios convencionales, y anuncios a medio real la línea.

EL ECO DE ESPAÑA se publicará todos los días, a excepción de los lunes y las grandes festividades del año.

AÑO I.

MADRID.—VIERNES 25 DE FEBRERO DE 1870.

NÚM. 14.

EL ECO DE ESPAÑA.

PERIÓDICO MODERADO.

En la Administración y Redacción de este periódico Calle del Canalero de Gracia, número 40, principal.

El importe de la suscripción en Madrid se abonará en efectivo en la Administración. El de las provincias del propio modo, o por medio de libranza del Giro postal, o de los de correos, y también por letra de estanco, a favor de la Administración; de esta última manera o bien haciendo el abono en efectivo en la Administración, se servirán las suscripciones de Ultramar. El importe de las suscripciones que se envíen por cualquiera clase de giro, se hará por medio de carta certificada.

A continuación empezamos a publicar los dictámenes de la comisión sobre las leyes de

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES.

La comisión encargada por las Cortes Constituyentes de formular los proyectos de organización municipal y provincial presenta hoy terminado su trabajo, después del detenido estudio que la naturaleza e importancia del asunto requieren.

Tres siglos de despotismo han roto en nuestro país las tradiciones municipales, que fueron uno de sus mejores títulos de gloria en la antigüedad: la nación de los fueros y de los concejos; la nación que antes que ninguna en Europa había logrado establecer esas instituciones, que en diversa forma son consideradas hoy como el principal elemento de la organización liberal del Estado, llegó a ver las suyas en un punto de postración y abatimiento apenas concebibles, donde el espíritu local, siempre vivo y enérgico, había salvado en mas de una ocasión la independencia de la patria, tantas veces atacada.

El régimen liberal, trabajosamente introducido en España, había dado alguna más importancia a las corporaciones locales, sin llegar nunca a determinar de una manera clara y precisa el lugar que por su esencia y objeto deben ocupar en la economía general de la nación.

El sistema creado por la comisión de 1812 y ley de 1820 nunca pudo funcionar en condiciones normales, ni en sí mismo las tenía tampoco para producir el orden en la administración.

Las leyes actuales, formadas en una época de confusión política, que no permitió el natural desarrollo de los principios descentralizadores, presentan en sus disposiciones y en su misma estructura las marcadas huellas de la falta de idea y de plan determinado que presidió en su redacción.

Y el sistema que nació a consecuencia de la Constitución de 1845, inspirado en los principios de una escuela que por medio de una centralización administrativa ha pretendido erigir en dogma científico lo que al finalizar la Edad Media pudo ser obra del instinto autocrático de los reyes ó forzada exigencia de la tranquilidad del Estado ó de la nacionalidad comprometida, era totalmente inaceptable ahora que, pasados ya los peligros que en ciertas épocas justificaron la concentración de la autoridad, se pretende consagrar y enaltecer el principio de la autonomía, que transforma y vivifica todas las relaciones de derecho en las sociedades modernas.

La revolución de Setiembre, simbolizada en la Constitución de 1869, exigía, pues, para su verdadero cumplimiento la determinación orgánica de las corporaciones populares, que son, por lo que toca a la vida política del ciudadano, lo que es la familia para el hombre mismo en su vida social.

Fundar en bases sólidas la existencia de las corporaciones municipales y provinciales, garantizar su independencia y naturales derechos, y señalar los fines que deben cumplir y los medios necesarios de realización, de tal suerte que en su acción no sean un peligro para la vida política del Estado, ni para la libertad del individuo, es, propiamente hablando, hacer la segunda Constitución del Estado, su constitución administrativa, sin la cual muchos de los preceptos de la Constitución política no serían más que afirmaciones científicas ó principios abstractos, sin realidad práctica por falta de un organismo completo en el que puedan encarnarse y funcionar. La creación de este organismo, tal cual acaba de ser definido, presenta dificultades que la comisión no se lisonjea de haber podido vencer.

Las instituciones administrativas existentes en otros países, ofrecen pocos modelos que puedan ser apropiados al nuestro.

Inglaterra tiene en todas sus instituciones una extraña mezcla de feudalismo y democracia, de tradiciones antiguas y espíritu moderno, que puede ser muy útil para aquella raza enérgica, fuertemente individualista, pero que en otras naciones sería una causa de desorden y perturbación.

La Unión Americana, cuyas instituciones están fundadas en el principio federal, rechazado por nuestra Constitución, modela sus municipios, faltos por otra parte de unidad, con arreglo al espíritu individualista propio de las razas anglo-sajonas, abiertamente contrario al cooperativo, que domina en las naciones latinas.

En Bélgica vive la libertad, más bien por el aliento peculiar de la raza que por su organización local, notablemente impregnada en el espíritu centralizador.

Francia no ha conocido durante este siglo la libertad municipal; y hasta hemos podido conocer por la propia

experiencia lo que valen las instituciones de aquella gran nación, ciega é irreflexivamente trasplantadas a nuestro suelo.

Y las demás naciones, nacidas las unas nuevamente a la libertad, rechazándola abiertamente las otras, dotadas las más de condiciones que los son peculiares, no podían servir de ejemplo a un pueblo que por sus caracteres distintivos y por los extraños sucesos de que ha sido teatro, se encuentra en una situación de que no hay quizá ningún ejemplo en la historia.

Lo que hoy existe de nuestras antiguas instituciones forales presenta algunos caracteres relevantes, muy dignos de la atención del publicista; pero en su conjunto solo pueden aplicarse a los pueblos que sobre ellas han modelado sus costumbres políticas por una larga y no interrumpida tradición.

Por otra parte, los sistemas todos, así los antiguos como los modernos, se fundan en pocos y sencillos principios, cuyo desenvolvimiento teórico no ofrece grandes dificultades, por más que las presente muy notables en el funcionamiento y ejercicio de las instituciones que de ellos se derivan.

La organización de las corporaciones municipales propiamente dichas tiene en todos los países grandes rasgos de semejanza.

Un cuerpo deliberante, un vocal encargado de la parte ejecutiva, otros que, como delegados, le auxilian en su cargo; tales son, con pequeñas diferencias, los ayuntamientos en Inglaterra, España, Italia, Portugal, Francia, Bélgica, Prusia y en parte de la Unión Americana. Donde la centralización existe, como en Francia y Bélgica, el alcalde ó jefe del ayuntamiento, *maire ó burgomestre*, es nombrado por el poder ejecutivo: donde se respeta la autonomía local, los poderes de este funcionario emanan directa é indirectamente del cuerpo electoral.

Así han existido entre nosotros los ayuntamientos, así existen todavía; y siendo esta organización la más sencilla al par que la más apropiada a nuestro carácter y tradiciones, no había para qué modificarla.

Muy diferente es el aspecto del asunto cuando se le examina por lo que toca a las atribuciones de estas entidades.

En casi todas las naciones modernas, el Estado, bajo el nombre de administración, se atribuye la realización de fines que nada tienen de administrativos, y que propia y exclusivamente pertenecen a la acción individual de la misma suerte la autoridad central monopoliza y absorbe ciertos servicios, que si bien por su esencia misma están comprendidos en la noción fundamental del Estado, por su esfera restringida, por su carácter circunscrito y local, son impropios de los poderes supremos que representan el organismo y los intereses de la colectividad nacional.

Deslindar en esta aparente complicación de relaciones que caracteriza a los pueblos modernos lo que pertenece propiamente al individuo de lo que pertenece al Estado; definir cuál es la parte que debe conservar la representación colectiva, y cuál la que corresponde a cada una de estas representaciones locales que constituyen la organización interior de la nación, es empresa por demás difícil, que la ciencia ha acometido con algún éxito, pero que en ningún país del mundo ha recibido hasta ahora solución completa y satisfactoria.

Y se comprende muy bien que así suceda: los principios científicos, al recibir su sanción práctica en las leyes, tienen que sujetarse a las condiciones y circunstancias de tiempo y lugar, cuya apreciación entra en la esfera del gobierno, y las tradiciones, las costumbres, los intereses creados y hasta las preocupaciones mismas son otros tantos obstáculos que se ofrecen a veces de un modo irresistible al desenvolvimiento lógico y racional de las teorías y modifican profundamente el carácter de las instituciones de cada pueblo.

Aparte de esto, dista mucho aún de haber acuerdo en los principios mismos. Los absolutistas y los liberales, los individualistas y los socialistas representan ideas contradictorias, que en su lucha cotidiana han dado lugar a una multitud de términos medios, fundados los unos en un criterio racional y sintético, los otros en un sincretismo empírico é instintivo, y que ofrecen en la práctica una infinita variedad de soluciones, caracterizadas por la mayor ó menor participación de los dos principios de autoridad y de libertad cuya conciliación pretenden todos.

La comisión no podía aspirar a hacer lo que nadie hasta ahora ha podido conseguir.

Tan lejos de los que fundan su criterio en la condicionalidad de las circunstancias, como de los que a todo trance aspiran a la inmediata realización de los principios

científicos, estén ó no universalmente reconocidos; persuadida de que el progreso de un pueblo resulta del desarrollo orgánico en la historia de sus instituciones, sin cesar modificadas por las nuevas ideas que poco a poco van penetrando en la vida pública, ha tratado únicamente de presentar la fórmula práctica que hoy cree más en armonía con nuestro estado político y social, y con las aspiraciones de la revolución de Setiembre, simbolizadas en la Constitución de 1869.

En concepto de la comisión, es necesario distinguir la vida política de la administrativa, mucho más ahora que se manifiesta una marcada tendencia a reducir las atribuciones fundamentales del Estado a la esfera de la administración en su sentido más amplio y comprensivo. Mientras esto no tenga su realización, lo que forma la vida política debe estar bajo la autoridad de los poderes generales de la nación, constituyéndose la descentralización en la parte administrativa.

Así, pues, las corporaciones populares obrarán por derecho propio en lo relativo a la administración de sus distritos; pero tendrán solo delegación en lo que se refiere al orden político. Es decir, que la autonomía local alcanza a cuanto sea necesario para la existencia de la colectividad y al buen orden de las relaciones que por este concepto haya de tener con los individuos que la componen; pero no se extiende en manera alguna a las relaciones del individuo con el Estado en general, ni mucho menos a los intereses colectivos de esta entidad superior.

La nacionalidad, el orden, las instituciones no peligrarán ciertamente porque los vecinos de un municipio administran sus intereses y arreglen sus servicios como mejor les plazca; España no dejará de ser lo que es porque los pueblos fijen sus presupuestos, nombren sus empleados y ejerzan libremente todas las funciones de la vida local, con independencia de las autoridades centrales y superiores.

En cambio, la administración general ganará mucho con quedar libre de los infinitos pormenores de interés local que actualmente le abruma y la impiden concentrar su acción y sus esfuerzos en lo que atañe a los grandes intereses confiados a su vigilancia.

No terminará la comisión sin decir algunas palabras por lo que toca a diputaciones provinciales.

En concepto de muchos, la provincia es una entidad imaginaria, que no corresponde a ninguna necesidad real y positiva.

Con reparar no más en que no hay en el mundo nación donde esta entidad no exista en una ó otra forma, la comisión cree que habría justificado su opinión contraria a aquella idea, si además la Constitución misma, que sanciona la existencia de las diputaciones provinciales, no estableciese un precedente imperativo, del que no es posible desentenderse.

Si su actual conformación corresponde ó no al buen orden político y administrativo de la nación; si conviene ó no variar su número y estructura, son cuestiones que ni atañen a la comisión, ni menos afectan a la esencia misma del proyecto.

El espíritu provincial ha sido y es demasiado enérgico en España para no ver en él una fuerza que conviene a todo trance hacer entrar en la economía general de la nación. Esto no se consigue destruyendo la importancia de las diputaciones provinciales, sino levantándolas hasta la altura de los intereses que representan y de la grande idea que simbolizan. La comisión ha creído que esto podía conseguirse organizando estas corporaciones con arreglo al sistema belga, que no es, en suma, sino el mismo que rige en nuestras provincias forales, acomodado a las costumbres modernas.

Una novedad introduce el proyecto, que será quizás mal mirada por muchos.

La comisión cree que el buen orden de las funciones administrativas exige la separación completa entre la deliberación y la acción.

Por lo que hace a los ayuntamientos, la separación existe, por una parte en las facultades concedidas a los alcaldes; por otra en el organismo de la junta municipal, cuyos vocales asociados intervienen en ciertos actos importantes de la administración local.

El sistema adoptado por la comisión produce la misma separación en las diputaciones provinciales; pero es consecuencia ineludible la constante residencia de los vocales de la comisión ejecutiva en la capital de la provincia, y esto ofrece dificultades que solo pueden salvarse concediéndoles alguna indemnización pecuniaria por los gastos que la residencia permanente trae consigo. De otra suerte, ó se limitará de una manera extraordinaria el número de los que puedan componer la comisión ejecutiva, ó se vincularán sus funciones en los diputados que residen en la capital, ó será imposible

qué pretensión al regente. Y al otro día, cuando salgo de mi casa yo confiado en encontrarme al menos de estos cuadros *criminales*, al llegar a la esquina, lo único que veo es un bando del señor gobernador sobre reuniones públicas, limitando este derecho *ilimitable*, legislando este derecho igualmente *ilimitable*.

Pues es tanto lo que la atmósfera se ha impregnado en la picaresca política, que no respira uno, ni habla más que de eso, y la prueba es que empezaba mi *Madrid de día* con ánimo de poner al corriente a mis amables lectoras y lectores de las diversiones y fiestas diurnas, para distraerlos y apartarlos de esa especie de epidemia, de esa enfermedad contagiosa, é incurro yo en el mismo vicio.

Y sin embargo, tengo que cumplir mi cometido.

Tengo que dar un pésame y una enhorabuena a las personas *diletantí*.

Fácilmente se comprende que se refiere el pésame a la conclusión de aquella sociedad de cuartetos que durante algunos domingos por las tardes tan agradablemente nos entretenía con aquella música clásica, pura y tan magistralmente ejecutada. Esta sociedad ha hecho su *Ritaché*, y esperamos, no en vano, que en el próximo invierno, ó antes si posible fuese, volverá a deleitarnos con sus armónicos sonidos.

Es la enhorabuena por el anuncio de los próximos conciertos en el Circo, que antes era del Príncipe Alfonso y que por no sé qué milagro ha podido salvarse de llevar un nombre revolucionario, contentándose con el de Circo de Madrid.

Estos conciertos, que tan gratos recuerdos han dejado en los cuatro años pasados, van a volver a reanudar sus tareas.

La orquesta de profesores está bajo la direc-

consegir la permanencia de aquel cuerpo; consecuencias las tres igualmente funestas para la administración de la provincia.

Por otra parte, las indemnizaciones no son extraordinarias: 60, 80 ó 100,000 rs., no suponen gran cosa en presupuestos que no bajan, por término medio, de 4,500,000 reales; y en todo caso, puede la diputación acordar una indemnización inferior, supuesto que las cifras indicadas son el máximo de las que hayan de concederse.

Poco importa que por esta razón sean más codiciosos los cargos y más reñidas las luchas electorales; antes al contrario, este mismo estímulo creará una provechosa actividad, sin la cual serían inútiles las mejores leyes, convertidas en letra muerta ante la apatía é indiferencia del espíritu individual. Inútil es decir que la mayor descentralización supone mayor responsabilidad en los encargados de la representación popular. Si la administración local ha de conservar su independencia, es necesario sustraerla cuanto sea posible a la intervención de las autoridades gubernativas, cuyo carácter, esencialmente político, puede dar lugar a ingerencias peligrosas y a frecuentes perturbaciones en el funcionamiento de las corporaciones populares. La acción, necesariamente discrecional de la administración, puede en muchos casos ser substituida por la más solemne de los tribunales de justicia, y en ello nada perderá la moralidad de la gestión, ni los intereses de los administrados, ni el prestigio de las autoridades superiores.

En resumen: la autonomía local en el orden administrativo, y la delegación en el político; la separación entre la parte deliberativa y la ejecutiva; la publicidad en todos los actos de las corporaciones; la intervención del poder supremo en cuanto basta a asegurar el cumplimiento de las leyes, y la responsabilidad completa y eficaz ante la administración ó los tribunales de justicia, son los principios cardinales en que están fundados los proyectos que la comisión tiene la honra de someter a la superior ilustración de las Cortes Constituyentes.

Por primera vez el principio de la descentralización administrativa se presenta clara y terminantemente formulado ante la representación nacional: las Cortes se dignarán conceder su indulgencia por los errores en que haya podido incurrir la comisión, y los señores diputados, con su ilustración superior, su elevado criterio y su imparcial cooperación, mejorarán la obra necesariamente imperfecta de esta, y lograrán, para su mayor gloria, dar vida cierta a las instituciones municipales y provinciales, de las que recibirá el necesario complemento la revolución de Setiembre y la libertad su más firme é inquebrantable garantía.

LEY MUNICIPAL.

TÍTULO PRIMERO.

DE LOS DISTRITOS MUNICIPALES Y DE SUS HABITANTES.

CAPÍTULO UNICO.

Artículo 1.º Es distrito municipal de un pueblo su término jurisdiccional.

Art. 2.º Todo distrito municipal estará agregado a un partido judicial y a una provincia de la nación, formando parte de una jurisdicción en todos conceptos.

Art. 3.º No se hará alteración alguna en los límites de los distritos municipales, sino en la forma que el artículo 23 de esta ley determina.

Art. 4.º Para hacer pasar un distrito municipal de uno a otro partido se oirá a los ayuntamientos del pueblo y de las cabezas de partido, a las diputaciones y gobernadores y al ministerio de Gracia y Justicia. La resolución del expediente corresponde al ministerio de la Gobernación, con audiencia del Consejo de Estado.

Art. 5.º Es vecino de un pueblo todo español mayor de edad, emancipado, que se halle inscrito en el padron de vecindad del distrito municipal.

Art. 6.º Corresponde a los ayuntamientos la declaración de vecindad en sus respectivos distritos, y pueden hacerla de oficio ó a instancia de parte.

Art. 7.º Los ayuntamientos declararán de oficio vecinos a todos los españoles, cabezas de familia, que en la época de formarse el padron lleven dos años de residencia fija con casa abierta en su respectivo distrito municipal, ejerciendo en él una profesión ó industria, ó teniendo un modo de vivir conocido.

También se hará esta declaración respecto a los que ejerzan cargos retribuidos por el Estado, la provincia ó el municipio, que exijan residencia en el distrito, aun cuando ésta no llegue a dos años.

Art. 8.º Los ayuntamientos en cualquier tiempo del año declararán vecino a todo el que lo solicite, sin que por ello exenta de levantar las cargas municipales.

(Se continuará.)

ción del entendido Sr. Monasterio, que tanta fama ha alcanzado en las principales capitales extranjeras donde con justicia ha sido aplaudido, como director, como violinista y como músico consumado.

Los conciertos se verificarán en los domingos 6, 13, 20, 27 de Marzo y 3 y 10 de Abril, a la hora de costumbre, esto es, a las dos.

El Sr. Monasterio dará a conocer la 4.ª sinfonía de Beethoven; la 47 de Mozart; toda la célebre obra de Mendelssohn, titulada: *El sueño de una noche de verano*; algunas *Overtures* de Schubert y Schumann, autores no conocidos del público madrileño; sin perjuicio de repetir aquellas obras que han merecido mayor aceptación en los años anteriores.

Ya están terminadas las obras del local, el cual ha sido convertido en un espacioso y cómodo teatro.

Excusamos encarecer a los antiguos abonados y a los que deseen serlo nuevos, que no pierdan tiempo en abonarse, pues de lo contrario, podría suceder que cuando quisieran recordar fuese *tropo tardi*.

Tendremos al corriente a nuestros suscritores de todo cuanto en ellos ocurra de notable, y en nuestras *Revistas* daremos detalles que indudablemente harán más amena esta clase de lectura, de suyo árida.

Decimos árida, y francamente, no es esa la palabra.

Nos parece más a propósito llamarla difícil. Si, lectores: no hay mala más difícil que rescatar el *Madrid de día*. Generalmente, la vida de Madrid adolece de una dulce monotonía. Ningún hecho extraordinario viene a inquietarlo, salvo raras excepciones. Los días, las horas, los minutos, están contados, y nadie se permite salir de la regla general.

Las señoras, por la mañana a sus misas y sus tiendas, cumplen con Dios por medio de las primeras, y luego cumplen con el mundo haciendo sus pequeñas compras, para lucirlas en pasos, teatros y reuniones. Los pollos, a esas horas de la mañana, halláanse paseando por la Carrera de San Gerónimo, pues fuera falta imperdonable el no verse tres ó cuatro veces al día.

Por las tardes a la consabida Castellana, que dejó de ser *serfiente*, donde se dan tres ó cuatro vueltas, se saluda trescientas ó cuatrocientas veces, y a las mismas personas, y todos los días, y luego, se retira cada uno a su casa, con la esperanza de volverse a reunir en algún teatro ó en alguna reunión de las que abundantemente abundan.

Todos encuentran esto pesadísimo, todos manifiestan aburrirse, todos dicen que no se concibe semejante género de vida, todos reniegan de ella, y desgraciado del que algún día ocupaciones importantes le priven de su Castellana, aquel día comprende que le falta algo, aquel día no ha hecho sus trescientos saludos.

Apartémonos un poco de esa monotonía. Debemos esperar que pronto el buen tiempo saldrá de su retraimiento y empezarán las giras de campo, los almuerzos y los *pique-niques*, que de seguro han de estar animados.

Con estas diversiones se entretiene la gente rica, y siempre trae ganancias para los pobres, a quienes hay que socorrer, a quienes hay que dar trabajo por estos medios de caridad pública, sin que esto sea suponer que todos, y principalmente nuestras aristocráticas damas, no usen de la caridad privada, como todos saben y admiran.

Nino.

FOLLETIN.

MADRID DE DÍA.

SUMARIO: Continúa la lluvia. —Enhorabuena a los labradores. —Cuento a propósito del diluvio. —Cuestión de modas. —Manifestaciones de obreros. —Trabajo y pan. —También las mujeres se manifiestan. —Pícaro político. —Pésame, y enhorabuena. —Conciertos en el Circo de Madrid. —Música clásica. —La vida de Madrid. —Dulce monotonía. —Misas y tiendas. —Castellana. —Caridad pública y privada.

He tenido momentos en que he creído que habíamos entrado en plena primavera.

Los primeros días de la semana pasada han sido claros, alegres y suaves; pero de pronto ha vuelto la lluvia más copiosa que antes, más abundante, más diluviana.

Supongo que los señores labradores estarán contentos, y todos debemos estarlo; porque esta lluvia, más que agua, es pan, es paz, y puede llegar a ser hasta gobierno, que buena falta nos hace. Pero no estaría de más que nos dejase un poco en paz estos días de Carnaval, pues se anuncian cosas peregrinas en punto a máscaras, comparsas y trages, de las que enteraré a mis lectores con sus pelos y señales.

Y es bueno que cese tanto llover, porque también las cosechas se pierden por exceso de humedad. Cuenta un amigo mío que ha leído en un libro viejo, que en el año del diluvio universal, los tres primeros días se regocijaban las gentes del campo, prometiéndose una gran cosecha, con ocasión de aquellas lluvias; pero cuando las nubes rompieron en cataratas, y continuó lloviendo y lloviendo, aquello fué un mar lágrimas, y luego

acabó por ser un gran castigo contra la humanidad soberbia y pecadora. Durante algunos días he tenido un serio temor.

Como veo, desgraciadamente, todos los días, no se piensa más que en implantar en nuestro suelo modas, usos y costumbres francesas y extranjeras, me horrorizo ante la idea de que se implante en nuestro hermoso cielo la chispeante lluvia *parisienne*, ó la triste y densa niebla de Londres.

Afortunadamente no es así; la moda no reina de tejas arriba.

Pero lo cierto es que cuando levantamos la vista al cielo, y no le vemos puro, sin nubes y presentando ese azul, que con razón ha sido llamado azul de España, en vez de azul celeste, dudamos estar en nuestra patria. Y eso, que si la duda nace cuando alzamos la vista al cielo, cuando, por el contrario, la extendemos por doquier, nos convencemos de una triste realidad, de que estamos en España. No en la España que ha sido objeto de tantos cantos y alabanzas. No en esa nación que ha sido el terror y la envidia de todas las demás naciones, sino en la España liberalísima, *mondérquico-radical-progresista-democrática* de 1870.

Voy al Prado, y me encuentro con una manifestación de 5,000 obreros que pacíficamente piden trabajo y pan. Voy al día siguiente a pasear por la Ronda, y en la Cuesta de Areneros me encuentro otra manifestación *corregida y aumentada*, pues llegaba el número a 7,000 personas, que piden igualmente trabajo, y más que trabajo, pan; por lo cual considero, que eso de pedir pan, se ha hecho ya el *pan nuestro de cada día*. En la calle del Arenal me encuentro con una manifestación de mujeres, que aunque en número escaso, metían más ruido que los 7,000 obreros, é iban con no sé

CRÓNICA PARLAMENTARIA.

En defensa del voto particular del Sr. Cisneros, pronunció ayer tarde un razonado discurso el Sr. Manterola; después de este y del que en el día anterior terminó el Sr. Cisneros, no es posible que la Cámara, procediendo con sereno espíritu, con imparcialidad y con justicia, otorgue al Tribunal supremo la autorización pedida para procesar al Emmo. señor cardinal arzobispo de Santiago. Todavía se levantará alguna otra autorizada voz consumiendo el tercer turno en pró de dicho voto particular; pero poco ó nada puede añadirse ya á la brillante defensa que del cardinal han hecho los expresados señores, quedando por ella probada hasta la completa evidencia que el Sr. Cuesta no ha incurrido en culpabilidad, y aun dado el caso de que hubiese incurrido en ella, el Tribunal supremo de Justicia sería incompetente para juzgarle.

El Sr. Manterola, haciendo una excursión por el terreno histórico, hizo oportunísimas citas de autoridades eclesiásticas que han dirigido ya á las más altas potestades temporales frases más enérgicas y severas que las que han motivado el suplicatorio que se discute, y demostró, citando el ejemplo de Inglaterra, que la total sumisión de las autoridades eclesiásticas al poder temporal, conduce por una fatal pendiente hacia el cisma. Los argumentos del Sr. Manterola no tienen réplica: ¿qué sería, en efecto, del prestigio que los obispos deben gozar entre los fieles, y de la autoridad que sobre ellos deben ejercer en lo tocante á la religión, si se viere debilidad y ciega sumisión en actos que reclaman energía y vigor?

De labios tan autorizados, como los del diputado por Alava en la materia que se discutía, esparíamos un discurso nutrido de sana doctrina, y nuestras esperanzas no se vieron defraudadas; sin embargo, no pudimos menos de extrañar en boca de S. S. ciertos halagos dirigidos á la minoría republicana, con la cual manifestó tener más afinidades que con el señor ministro de Gracia y Justicia, manifestación que no fué muy cordialmente aceptada por los republicanos, los cuales no podrán seguramente creer en la sinceridad de las palabras del Sr. Manterola, dados los principios que representa el partido á que pertenece.

El Sr. Bueno, individuo de la comisión, combatió el voto particular, y empezó un discurso verdaderamente progresista, que ocupó el resto de la sesión, quedando en el uso de la palabra para el día inmediato; pero como por el principio, se conoce el fin, sin estar dotados de espíritu profético, podríamos de antemano asegurar que en nada debilitará las defensas hasta el presente hechas del voto particular, pues en la sesión que resemos, todos sus argumentos se limitaron á excitar las pasiones, presentando como irresponsables ante la ley á las personas colocadas en elevada posición, pidiendo que sean medidas con igual rasero que el más infeliz individuo del pueblo, y en presentar al clero como una sociedad subterránea, ante la cual cede todo poder.

Estas, que son solo palabras de efecto, y aun únicamente en las bajas esferas de la sociedad, en inteligencias incultas, son una prueba de la escasez de razones para combatir las expuestas por los Sres. Cisneros y Manterola con tanta elocuencia como verdad. Estos son recursos más propios de autores de novelas de á medio real la entrega, que de hombres que con tanto énfasis se titulan legisladores del país.

En la sesión de la noche, á que concurrió escaso número de diputados, continuó la discusión del voto particular del Sr. Fernandez de las Cuevas sobre el presupuesto del ministerio de Fomento, habiendo ocupado toda la sesión un discurso del señor ministro del ramo, cuya principal parte dedicó á defender la organización actual del cuerpo de ingenieros.

La abundancia de material por una parte, y la escasa importancia de la sesión de ayer, nos obliga á dar solo un ligero extracto de los debates de ella.

DISCUTAMOS.

Si nuestro propósito al tomar puesto en el periodismo fuera examinar históricamente las causas de las desventuras que todos deploramos, para promover cuestiones personales y dar satisfacción al vano gusto de deprimir y maltratar á los que pudiéramos tener por adversarios ó enemigos, nada nos sería tan fácil como aprovechar la ocasión que nos ofrecen con sus mal intencionadas embestidas algunos que no sabemos con qué mérito superior, con qué autoridad inmaculada, se pavonean pretendiendo ser jueces imparciales, desinteresados y rectos de todo el mundo, y poseedores exclusivos de la receta de los términos medios y de las soluciones templadas, progresivas y conciliadoras. Pero como los fines á que abiertamente nos dirigimos son algo más nobles y consistentes en miras un poco más patrióticas y levantadas que las de poner en paralelos y discordias intereses y pretensiones individuales, no tomaremos en cuenta las sugerencias poco benévolas que hemos hablado, sino en cuanto conduzca el examinarlas á resolver el difícil problema que el fracaso notorio, y por cierto previsto y anunciado, de la revolución de Setiembre, somete no solo á nuestra acción, sino á la expectativa de todas las naciones civilizadas.

Hemos examinado la tristísima lección que este problema oculta en sus términos: hemos dicho lo que todos los españoles, lo que la Europa entera no puede menos de confesar. La revolución de Setiembre ha salido vana; no ha establecido cosa alguna; ha sido completamente estéril; no ha dado ni si más que inmensas desventajas. Es preciso, pues, ponerle término, y que el país salga del torbellino en que se agita y estenua sin fruto ni esperanza de alcanzarlo.

Por lo que toca á las premisas de esta conclusión, todos estamos de acuerdo, cada cual bajo su punto de vista distinto. Los republicanos unitarios, federalistas, sonrosados y rojos dicen lo que nosotros decimos, cuando acusan á la revolución por no haber salido del carril de los partidos doctrinarios y por no haber realizado ninguna de las promesas esenciales con que se anunció. Los progresis-

tas de cosas y de personas, medios, semi-realistas y extremados, que no se diferencian de los seguidores de la república sino en la idea de mantener una como monarquía y en tal cual solución eclectica, que los asemeja levemente en ciertos puntos á los partidos conservadores, coinciden con los republicanos en confesar que el movimiento de 1868 ha quedado muy atrás de las ambiciosas perspectivas de los programas de primera hora. Todos los días se anuncia como cosa concluida y disuelta la inmoral alianza de los unionistas con los ministeriales á toda costa, y con los pocos del partido democrático, infelices catecúmenos de la religión monárquica, á quienes la germania de la prensa señala con el curioso nombre de cimbríos. La unión liberal, cuya doctrina es en su principio y en el máximo de la práctica la del partido moderado, pero cuya ley moral es unirse á todos los elementos descontentadizos, disidentes y facciosos cuando no está en el poder, viendo precipitarse de abismo en abismo la combinación política que sus menguados caudillos, con tan poca previsión, como notoria ingratitud prepararon, al aproximarse el momento de la disolución, se convierten en áspidos fiscales de su propia labor, y se preparan á virar en redondo y á correr, con provecho se entiende, según su costumbre, el nuevo temporal que apunta en el horizonte. Todo el mundo, por consiguiente, abandona á la revolución y reniega de su imperio.

Pero ¿cuál será la forma de su caída? O de otro modo: ¿quiénes los llamados á la herencia del poder? Aquí fica ó punto. ¿Se deberá partir del estado en que se hallaba la nación cuando el pronunciamiento inaudito de la escuadra vino á sorprenderla, ó se deberá partir de la revolución misma? La cuestión no puede ser más grave. En este último caso, ¿se admitirá toda la obra revolucionaria, ó solo una parte de ella? Si una parte solamente de ella, ¿cuál? En el naufragio de la revolución, ¿qué fracción del cargamento deberá salir á salvo? ¿Quiénes de los que componen la tripulación y el conjunto de los pasajeros serán admitidos en las lanchas y llegarán á tierra? Y aun suponiendo que algunos de los naufragos y sus pacotillas se salven, ¿qué lugar les cabrá entre los que, no habiéndose embarcado en la nave revolucionaria, se han quedado en lo firme?

A todas estas preguntas, cada cual contesta en conversaciones privadas del modo que le inspiran sus deseos, sus opiniones ó sus intereses; nadie, sin embargo, se aventura á proponer en pública discusión sus soluciones. Nosotros no hemos vacilado en apuntar algunas de las nuestras. La pasión y el interés las han recogido para desnaturalizarlas. El mejor modo de conseguirlo era reducir las á los estrechos límites de la significación ó influjo que pueden suponerse á unas ó á otras personas.

Protestamos enérgicamente contra semejante interpretación. Dejemos á las personas á un lado cuando se trata de los principios. Ese es negocio individual; pero que tampoco faltaremos si á ello se nos obliga. Veamos la cuestión á la luz de los principios, de la experiencia que producen los hechos, de la lógica, de la razón y de la justicia.

¿En qué consiste la legitimidad de las revoluciones? ¿Está, por ventura, en la fuerza numérica y material que desarrollan? ¿Está más bien en el poder y eficacia de los pensamientos que proclaman y de las transformaciones que realizan? En una palabra, ¿las revoluciones son un producto brutal del número, de la violencia y de la fortuna, ó son explosiones inevitables y á veces provechosas de las ideas, llamadas á remediar dolencias y necesidades desatendidas y despreciadas? Nuestra opinión es que si las revoluciones no son la consecuencia de una necesidad esencialmente vital y no traen el remedio que esta necesidad reclama, no tienen un derecho completo á la legitimación de todas las obras, mientras estas obras no respondan á los intereses sociales.

Demuéstrennos la necesidad imperiosa, inevitable de la revolución de Setiembre. Demuéstrennos la eficacia de sus procedimientos para remediar los males públicos. Entre nosotros en esta discusión, sin ocuparnos para nada en la significación de las personas; no á gritos, no á palos, no con amenazas, sino con razones y con hechos. A la luz de la verdad que este debate descubre, veamos el camino por donde hemos de salir de la importante agitación que nos mata. Y si á pesar de nuestro deseo de no mezclar en esta controversia las cuestiones de principios con los miserables intereses de las personas, se quiere que estos pobres asuntos se conviertan también, conste que no somos nosotros los que provocamos tan estériles y perniciosas luchas, ni los que deberemos responder de las consecuencias á que nos lleven.

La revolución, ¿era necesaria? Digáenos en términos precisos por qué. Examinemos el motivo de ella, su origen, la hora en que empezó sus preparativos. Veamos sin pasión los actos que, según se dice, la provocaron; analicemos sus diferentes tentativas y el modo con que en varias épocas fueron tratadas. Veamos bien todo lo que ha precedido á la revolución. Vengan á juicio todos los antecedentes del suceso. La política de asimilaciones personales y de aventuras; la de transacciones y sincretismos bastardos, la de tolerancias recíprocas é inteligencias catilinas antes y después de escalar el poder; venga sobre todo á juicio la política financiera de todas épocas, con toda su importancia y con todos sus antecedentes. En el fondo de todas las revoluciones hay siempre una cuestión de Hacienda. Averiguemos en resumen si había ó no medios útiles y pacíficos en la legalidad anterior á la iniciación primera de los procedimientos revolucionarios para mejorar la suerte del país, ó si la causa de las agitaciones que han concluido por combinarse y dar la victoria de 1868, consiste en un juego de ambiciones ininteligentes, desatendidas y an-

tipatríóticas. Curanderos de los males de la legitimidad, sepamos la virtud y el poder de vuestras drogas.

Del golpe de mano triunfante ayer y espiante hoy, que se conceda á sí mismo con el pomposo nombre de revolución, apelamos ante el tribunal de la experiencia y ante los horribles desengaños del país. Si esta apelación se recibe con la algarabía, declamaciones y violencias de costumbre, todavía diremos como el ilustre capitán ateniense: *Heridnos, pero escuchadnos*. Somos la lógica, somos el derecho, somos la legitimidad, somos la tradición, somos la libertad verdadera, somos la conciliación posible; no somos la fuerza bruta, pero somos la opinión, que es millones de veces más poderosa que todas las fuerzas.

Al hacernos cargo, por segunda vez, de lo dicho en las Constituyentes por el presidente del Consejo de ministros respecto á la conducta observada en Barcelona por algunos oficiales de aquella guarnición con el fin de socorrer á varios de sus compañeros retirados en dicho punto, comenzaremos, como por vía de preliminar, con estas brevisimas indicaciones:

1.ª La Constitución de 1869, como ley fundamental de la nación, es ley de comprensión tan universal, que no excluye para nada á ningún español que no resulte literalmente exceptuado en la misma.

2.ª Que es derogatoria de todos los códigos, leyes y ordenanzas no conformes con sus principios declarados, y que no resulten por ellos exceptuados.

3.ª Que por esto, para que la generalidad preceptiva no se tome por universalidad, dice el Código penal en su artículo 7.º: «No están sujetos á las disposiciones de este Código los delitos militares... ni los demás que estuvieren penados por leyes especiales»; cuya igual declaración no contiene la antedicha Constitución, por no haber querido exceptuar á los militares de ninguno de los derechos y garantías que declara y concede á los españoles todos.

Y 4.ª Que por estas consideraciones, y para obviar los arbitrarios efectos de la oscuridad, se han apresurado todas las monarquías constitucionales de Europa á publicar, como necesario sosten de la disciplina inexcusable muestra de acatamiento á las recién establecidas leyes fundamentales, nuevos códigos para sus ejércitos, en armonía, según las necesidades de los mismos, con las novísimas políticas instituciones. Y de tal modo se han acelerado, que en Italia, por ejemplo, fué expedido su código militar, derogatorio del flamante de 1840, en 1.º de Octubre de 1859, redactado por virtud de los poderes extraordinarios concedidos al rey al efecto por la ley de 25 de Abril anterior; ó lo que tanto vale, que en el mismo año de la promulgación de la Constitución del nuevo reino, se expidió al ejército su código particular, en perfecta consonancia con el fundamental de la nación, y no sin que precedieran muchas disposiciones provisionales, hasta el día de su publicación. Pero no es esto todo; Rusia y Suecia, que aún no han entrado en el concurso constitucional europeo, acaban de sustituir en 15 de Mayo de 1867 y 22 de Julio de 1868 sus antiguas ordenanzas, mucho más modernas que las nuestras, por códigos (con derogación de toda pena corporal el último, y en conformidad á las nuevas leyes dictadas por ambos países), fundados en principios tan justos y de tanta y tan envidiable legalidad como los de Francia, Italia y Bélgica.

Esto sentado, y entrando ahora en lo principal de la cuestión, preguntamos:

¿Qué es lo que ha pasado recientemente en Barcelona con la oficialidad de alguno ó algunos cuerpos de su guarnición?

¿Qué lo que con tal motivo ha dicho en las Constituyentes el ministro de la Guerra?

Parece ser, en cuanto á lo primero, que los oficiales retirados en dicha plaza, hallándose con algún retraso en el percibo de sus haberes, se acercaron á sus compañeros en servicio activo, quienes, como era natural, hicieron una colecta á favor de ellos; añadiendo otras versiones que una comisión de dichos oficiales activos se presentó al capitán general, exponiendo la situación de los retirados, y suplicándole reverentemente se sirviera influir para que fuesen socorridos con una paga, aunque ellos dejaran de percibir por tal motivo la primera que les correspondiese.

Y en cuanto á lo segundo agregó: «Que el capitán general, viendo que con esto, es decir, con la primera parte de la versión, se faltaba á la ordenanza, los mandó á disposición del gobierno, que, en consideración al laudable sentimiento que los guió, pero teniendo en cuenta al mismo tiempo el derecho que asistía al capitán general, los había destinado á otros batallones».

Cuyas palabras, pocas en verdad, son tan indiscretas y despoticas, que no se han pronunciado nunca iguales en ocasión alguna, según nos proponemos demostrar.

De ellas resulta:

1.º Que la reunión de los oficiales en activo servicio para hacer una colecta á favor de los ya retirados del servicio, es falta de ordenanza.

2.º Que por esta razón, el capitán general los mandó á disposición del gobierno.

3.º Que este, en consideración al laudable sentimiento por que fueron impulsados, los había destinado á otros batallones.

Y 4.º Que para adoptar tal determinación, tuvo en cuenta el derecho que asistía al capitán general.

Sin perjuicio de hacernos cargo más adelante de esta sarta de despropósitos y de sacrilegios militares, vamos á suponer real y efectivo el más grave caso de los indicados, cual es el de la presentación de una comisión de oficiales al capitán general; pero con la prueba de ser lícita dicha presentación, quedará sobradamente probada la amplia libertad que tienen los militares de todas clases para hacer cuantas colectas tengan por conveniente á favor de las personas que de su agrado sean.

Al efecto diremos que las ordenanzas militares permiten del modo más amplio posible, por falta de prohibición expresa ó supida, que todos los individuos del ejército, sin distinción de clases, ejerzan el derecho de petición (hoy declarado natural)

que es inherente á todo individuo asociado; pues que el de representar de agravios contra sus superiores, declarado está amplia, liberal y repetidamente á todas las clases, incluso la de soldado, nada menos que ocho distintas veces, si bien con mucha sabiduría restringido con las limitaciones de que dichos recursos han de hacerse por el regular conducto de inferior á superior, por escrito alguna vez y verbalmente las demás, é individualmente por regla general y colectivamente para caso particular; pero todo ello con el inapreciable derecho de romper dicho conducto para llegar fuera de él hasta el mismo rey con la representación de su agravio, en el caso de no obtener, no la satisfacción debida, sino la á que los recurrentes se consideran acreedores. Y aunque antes y después de las ordenanzas se han expedido muchas reales órdenes sobre el particular, están calchadas en su totalidad sobre el principio establecido en la de 11 de Noviembre de 1752, por todas ellas invocada, que dice: «Habiendo manifestado la experiencia que la preocupación de un pundonoroso impulso mal considerado, hace creer, con perjuicio de la tranquilidad y buen orden de los cuerpos, que el agracio hecho á un individuo trasciende á la ofensa común de los que sirven en aquel, de cuyo indiscreto modo de pensar resultan empeños que aventuran la subordinación, ha resuelto el rey que por ningún pretexto se permita, escuche ni apoye por coronel ni jefe militar alguno, recurso en voz de cuerpo que lleve tal objeto, etc.»

Así es que la generalidad de los militares de ciertas procedencias saben muy bien que lo prohibido por las ordenanzas, no es el derecho de petición, personal ó colectivamente ejercitado, que ha sido y es libérrimo, sino el de hacer recursos en voz de cuerpo por agravios inferidos á cualquier individuo, á excepción de los que carecen, por consecuencia del desorden en que vivimos hace 35 años, de la necesaria instrucción para no confundir, como los generales Prim y Gamín de han confundido, la simple petición, que es natural, con el recurso molesto, que debe estar y lo está regulado por las leyes; el deseo personal, en cualquiera forma que sea expresado, con la sediciosa representación en voz de cuerpo, pidiendo reparación de agravios; lo que nada tiene que ver con el servicio con lo que él es inherente; lo particular con lo oficial; lo meramente graciable, en una palabra, con lo que está regulado, previsto y determinado en las ordenanzas. Y solo oficiales elevados á grados superiores que carecen de las condiciones que son precisas para el acierto desempeño de ciertos cargos, pueden olvidar, ignorar ó no comprender, que aunque las dichas ordenanzas negasen esto, que no prohiben, podría practicarse, hoy por hoy, sin género alguno de dificultad, en cumplimiento del art. 20 de la Constitución vigente, que dice: «El derecho de petición no podrá ejercerse colectivamente por ninguna clase de fuerza armada. Tampoco podrán ejercerlo individualmente los que formen parte de una fuerza armada, sino con arreglo á las leyes de su instituto, en cuanto tenga relación con este.»

Así, pues, no estando negado el derecho de petición por la ordenanza, que es verdadera ley del reino, ni por ninguna otra ley posterior, en los asuntos no relacionados con las leyes del instituto militar, pueden impunemente los militares ejercer, como y cuándo les plazca, el derecho de petición; bajo cuyo concepto, y aquí nos hacemos cargo del párrafo 1.º de los numerados más arriba, han podido impunemente los oficiales de la guarnición de Barcelona pedir al capitán general, solos ó reunidos, que interpusiera su valimiento para que sus compañeros los retirados fuesen graciosamente socorridos, aun á costa de su propia paga; y que con igual razón, con la propia impunidad, y hasta con aplauso de todas las almas delicadas y sensibles, pudieran reunirse sin faltar á la disciplina, y al contrario, faltando gravemente á ella quien lo estorbara ó castigara, para recolectar un socorro con destino á sus compañeros necesitados.

Pero, y ahora pasamos al párrafo 2.º, si el capitán general comprendió que con estos hechos faltaron á la ordenanza sus subordinados, él faltó mucho más, enviándolos á Madrid sin facultades para ejecutarlo, en vez de haber procedido en el acto contra ellos, como pudo y debió hacerlo, pues que su inexcusable obligación fué la de mandarlos procesar y entregarlos al juicio del consejo de guerra, el único, si es que no se ha de subvertir la disciplina en su parte más interesante, que puede y debe proceder contra los que cometen faltas graves en el servicio.

Y si fué levisima la falta cometida, de esas que se pueden corregir por la vía gubernativa, y aquí nos hacemos cargo del párrafo 3.º, pudo y debió también haberlo hecho el mismo capitán general con las penas al efecto establecidas, y de modo alguno el ministro de la Guerra que, no tiene, como no la tenía en tiempo del absolutismo, jurisdicción, autoridad ni derecho como tal ministro, para apropiarse las facultades y atribuciones propias de los jefes y tribunales responsables, y mucho menos para un castigo arbitrario, ilegal y deprisivo á tercero, cual lo es el despotismo, por no estar establecido por las leyes, de destinar á dichos oficiales por vía de castigo, templado por cierta especie de conmisericordia, á otros distintos batallones del ejército, como si el servir en tales batallones fuese un castigo, ó receptáculo de oficiales criminales. ¿Qué contestaría el ministro de la Guerra á una representación de los oficiales de dichos batallones, resentidos en su honor por tal concepto, ó qué justa y legal providencia adoptaría si los mismos se negasen á alternar con los así castigados, ó si sus propios compañeros quisieran como se dice, compartir su suerte con ellos?

Finalmente, por ser ininteligible y no merecer los honores de la refutación en serio, pasamos por alto la muy peregrina especie de que tomó tal determinación, párrafo 4.º, teniendo al propio tiempo en cuenta el derecho del capitán general.

De consiguiente, no estando prohibido por las ordenanzas ni por ninguna otra ley posterior que los militares ejerzan el derecho de petición en asuntos no relacionados con el servicio, por más que prohiban, no el promover recursos de agravios, sino el de promoverlos en voz de cuerpo, es evidente que la Constitución de 1869, que es para todo el punto de partida y de llegada, declara el derecho de petición á todos y á cada uno de los individuos de la fuerza armada, puesto que las leyes de su instituto, sin negar el derecho, declaran,

como dicho queda, hasta el de representar colectivamente y en voz de cuerpo en algún caso particular.

Solo los hábitos del despotismo, y la ignorancia que tan acariaciada vive entre nosotros, han podido dictar las disposiciones originadas del presente artículo, y defenderlas y explicarlas con influencias en los superiores para que se cran, á título de sostenedores de la disciplina, á otros para hacer y deshacer, sin sujeción á ninguna ley, todo lo que bien les plazca; y dando alientos para que se crea que la disciplina es el absolutismo y no el exacto cumplimiento por súbdito y jefe de cuanto esté por las leyes instituido y regulado por instrucciones ó reglamentos.

Desconociendo, por último, el gran aforismo de los griegos, cuyos tiempos son universalmente reputados por los tiempos clásicos de la milicia de que el *oficio de general no consiste solo en dar disciplina á las tropas; sino en observarla ellos con mayor rigor que nadie, para el mejor gobierno del ejército y edificante ejemplo de los súbditos.*

LIBERTAD.

¿Qué palabra tan bella, qué teoría tan fecunda en resultados allá en las regiones elevadas del ideal político; pero qué desengaños, qué abusos, qué bastardías en la triste realidad! Qué hable por lo pasado la historia, que es maestra de la vida; que responda por nosotros la actualidad, que es testimonio de verdad irreusable.

Entre lo pasado y lo presente se halla la revolución de Setiembre, que es el punto de partida para nuestras reflexiones, porque si destruyó para no crear, en cambio los autores de la revolución se tomaron el gobierno, auxiliados de sus cómplices y encubridores, proclamaron el principio de libertad y formaron el nuevo Estado. ¿Qué gobierno, qué principio, qué Estado! Todo corresponde á su origen; nada responde á su objeto ni á su fin.

El gobierno no gobierna, vive y marcha al acaso; pero nos dice que administra, porque recauda y distribuye las contribuciones, se incauta de lo ajeno, aumenta lo propio y hace empréstitos para cubrir su déficit, sin manifestar las condiciones; no ejerce el derecho y la justicia, porque no suministra lo necesario para el desenvolvimiento moral, intelectual y material de la sociedad; no separa obstáculos, no viene en su ayuda con el orden y la igualdad para todos.

El nuevo Estado no se consolida, no se organiza, no procura la realización del derecho, porque el derecho que se refiere á la libertad consiste en los medios necesarios para la conservación y desarrollo de la libertad misma, y cada ciudadano por la suya tiene derecho á exigir que no se le pongan obstáculos á su ejercicio, y que se le den garantías de existencia y perfección. El nuevo Estado no las da, no protege el uso de la libertad bajo el criterio de la igualdad, sino, por el contrario, aplica el de la arbitrariedad y pandillaje, que es natural á su origen.

En situación tan crítica y desconsoladora, se manifiesta el sentimiento común, el sentido práctico verdadero, la opinión pública, en una palabra. Aparece soñolienta, porque sale del espanto que la revolución de Setiembre la causó. Recuerda las ofertas que los jefes iniciadores hicieron, y busca en vano los resultados. Vuelve los ojos á la que debió ser España sin honra; la ve sin gloria, sin dinero, y considera lo que es la revolución y los revolucionarios, para darse convencimiento propio. Se persuade de lo uno y de lo otro, y nuevamente observa que la revolución no marcha por la idea, y si los revolucionarios por sus ambiciones personales, porque su objeto es el yo y el presupuesto su fin; vé que la conciliación se rompe, que los coaligados vuelven á sus partidos, que se organizan y que nuevamente se aprestan á la última batalla.

¡Libertad! ¡Pobre libertad! ¡Cuánto de ti se abusa, qué mágico es tu sonido, qué entusiasmo produces, cuánto la pasión halaga, y qué absoluta carencia de sentido práctico encierra cuando te se interpreta como lo hacen los revolucionarios! ¿Qué símbolo tan desgraciado eres! ¿Sabes por qué? Porque sirves para mil conceptos diferentes; porque en tu variedad halagas la pasión, excitas los ánimos, cometes crímenes horribles y eres fuente de criminales y bastardas ambiciones, que tomando la idea y sobreponiéndose á ella, cambian tu sentido, te desacreditan y destruyen, se apoderan de ti los hombres de corazón dañado, no protestas del abuso, y á tu sombra se agrupan, crecen y desarrollan hasta realizar sus fines particulares. Es necesario que te detengas, te fijas y reflexiones para comprender, de hoy en adelante, que nunca se ha determinado bien por aquellos tu verdadero sentido, ni tu virtud, ni tu aplicación; pues ya sabes que libertad no significa voluntad sin obstáculos, sino al contrario, es la facultad de hacer lo que la ley permite y dejar de hacer lo que la ley prohíbe, con la obligación para gobernantes y gobernados, de observar y cumplir exactamente esta regla.

En todos los países, en todos los tiempos y en todas las ocasiones que la bandera de libertad se ha desplegado como principio político, se ha ocultado el verdadero propósito, dejando á sus partidarios la interpretación é inteligencia del sentido, sin haber un solo caso en que el noble, el recto ó el desinteresado haya prevalecido, sino por el contrario, siempre triunfó el egoísmo, el egoísta y el de parte, como lo demuestra la filosofía de la historia y la experiencia propia. De aquí el por qué en todas las épocas de la llamada libertad se ha ido con ella al abuso, al libertinaje y hasta la disolución social, para venir después al imperio de la fuerza, y por medio de la dictadura restablecer el imperio de la ley.

Prender hoy que la época que atravessamos fuera una excepción, sería vana quimeras; porque tenemos un gobierno sin antecedentes; ó mejor dicho, con adversos antecede-

dentes, un gobierno sin ley y sin fuerza, por- que los partidos agrupados para darsela, se descomponen hasta el extremo de no poder seguir ni retroceder aunque lo deseen. De aquí la necesidad de que los partidarios del orden y la conservación nos unamos para resistir, también para atacar en propia defensa, porque los hechos que presenciábamos y las manifestaciones que oímos, son resultado de la falsa libertad, del abuso justiciable de los jefes autores de la setembrina, únicos responsables de las desgracias de la patria, de la ruina del Tesoro, del malestar de todas las clases y de la miseria pública.

Recordar los manifestos tristemente célebres de Cádiz, publicados a bordo de la fragata *Zaragoza* el 17 de Setiembre por el señor Topete y por el conde de Reus, y por los generales Serrano, Prim, Dulce, Serrano Bedoya, Nouvilas, Primo de Rivera, Caballero de Rodas y Topete el 19 en la bahía; examinarlos hoy para recordar y comparar las ofertas con los resultados, las ambiciones y miserias con la honra de España prometida; nos haría separar los ojos con horror y el estómago con asco del cuadro revolucionario, por no contemplar desdicha tanta; pero nos afirmáramos en el íntimo convencimiento de que ya tenemos, de que la corrupción de los gobiernos empieza siempre por el abandono de sus principios, y que el gobierno de la España sin honra está en descomposición permanente, porque el principio de libertad que ha proclamado no le practica con igualdad; ni hay justicia, porque no es posible que la haya en nuestra sociedad política con un gobierno que hace lo que quiere, lo que puede, y nunca jamás lo que debe.

Ayer fué asunto de todas las agitaciones, alarmas, comentarios é invenciones en los círculos políticos, y muy especialmente entre los progresistas, el resultado del Consejo de ministros celebrado en la noche anterior. Todos los periódicos se ocupaban ayer en lo concerniente a esta cuestión, según su distinto modo de ver y deseos ó particular conveniencia de cada uno. Los que pasan por mejor informados, aseguraban que nada se había resuelto, ni se habían tratado los asuntos de interés que se había dicho deberse tratar y resolver en aquel consejo; esta era la versión más autorizada, y lo que en los periódicos de anoche quedó sentado como verdad inconcusa. La fórmula adoptada para referir lo que pasó en la célebre é importante reunión de los ministros, es hábil y exacta en la forma, más no el fondo.

Parece, según las más dignas noticias, que en efecto no se presentó la cuestión de gobernadores, pero fué porque antes de presentarse hubo, al solo anuncio del contenido de la lista de gobernadores, una oposición violenta y poco menos que una verdadera tempestad.

El caso no era para menos: el Sr. Rivero, que para algo había entrado en el ministerio de la Gobernación, parece que llevaba una lista nada menos que de 25 gobernadores democráticos ó címbrios, 14 unionistas, cinco progresistas y cuatro republicanos; como se vé, el Sr. Rivero había procurado por los suyos; mas no era cosa de que los progresistas consintiesen en volver á ser otra vez de los desheredados.

Dicese que los Sres. Prim y Sagasta, muy especialmente este último, se opusieron enérgicamente á semejante combinación, que excluiría por completo la influencia y acción personal de los progresistas en las provincias; no se dice si el señor Topete reclamó en favor de los unionistas, aunque es de suponer que así lo hiciera.

Añádese que el Sr. Rivero protestó y se sublevó contra el veto que sus compañeros ponían á su combinación, y que quiso reivindicar su independencia para hacer y deshacer en su ministerio y en todo lo que le concierne, lo que mas viere convenir; y que apoyaba sus argumentos en lo que habían hecho y hacían otros ministros, y muy especialmente el Sr. Figuerola, que contraía empréstitos y llevaba adelante los más trascendentes proyectos, sin que nadie le fuese á la mano.

Sin embargo, parece que los ministros progresistas permanecieron firmes ó inexorables en su resistencia, pues no querían abdicar en manos del Sr. Rivero, ni contribuir á que formase un pequeño partido, y menos en la eventualidad de unas elecciones. Por duro que le fuese, tuvo que resignarse el señor ministro de la Gobernación, y volverse con su papel en el bolsillo, y sin las ilusiones y planes que llevaría en su cabeza. Parece que en la combinación frustrada entraban varios ingenieros de caminos, frase que está muy en baja desde la revolución: es lástima que no hayan sido aceptados, porque lo habrían hecho como unos verdaderos sabios.

Resulta, pues, que si no se trató realmente la cuestión de personas, fué porque se trató en tesis general y sin tenerse en cuenta más que el número de los que pertenecían á cada fracción y lo que significaba al presente y para lo porvenir: es decir, que no se discutió la oportunidad ó conveniencia de nombrar á este ó aquel individuo, sino de aceptar ó no los cuatro grupos en las proporciones con que se presentaban.

El asunto era de la mayor importancia para los radicales: queriéndolo todo, iban á quedarse sin nada, y esto era hasta inconcebible para ellos. La irritación ayer era grande, y hoy no será menor: veremos lo que resulta, pero se nos figura que los radicales tratarán de romper y cejar, como suele decirse, por la calle de en medio.

La cuestión Montpensier se agita vivamente en estos momentos. Las negociaciones toman un carácter alarmante. Hay recursos nuevos. La unión liberal habla ya con el desden de la superioridad contra los radicales. ¿Estarán destinados los progresistas á pasar por la última degradación? ¿Estarán destinados á ser siempre engañados? ¿Estarán destinados á votar un rey francés, Borbon, y á quien han declarado cruda y justa guerra? ¿Serán, por último, víctimas otra vez, y otra vez carne de los cañones unionistas?

Si cayeran en este nuevo lazo que se les tiende, nos parecería muy noble otra patadura.

Merecerían verdaderamente una albarda. Lo sentiremos por la nación. Lo sentire-

mos por la humillación de los progresistas mismos.

Según *La Iberia*, se trata de establecer la milicia nacional forzosa: hé aquí cómo se explica nuestro colega progresista:

«La comisión de comandantes de voluntarios y de concejales que entiende en el reglamento sobre milicia nacional, estuvo anteayer tarde ocupándose más de dos horas y media de este asunto, dejándolo muy adelantado. Según parece, respetando los batallones de voluntarios que actualmente existen, y se conservarán, se consignó el principio del servicio forzoso.»

Hé ahí la libertad y cómo la comprenden los progresistas: todos son libres; pero con la obligación de servir á los hombres del progreso: no hacen falta soldados, con tal que todo el mundo se convierta en un vasto campamento para defender las situaciones progresistas.

Ya sabíamos que por ahí se había de concluir; pero se nos figura que es muy tarde para empezar.

Tomamos de *La Igualdad* los siguientes importantes párrafos:

«Lo más malo de estas situaciones inciertas y de estos perdurables cabildos, consiste en que toman autoridad ciertas versiones caprichosas, aunque sea por pocos momentos.

Anoche se decía que el general Prim estaba muy avisado y descontento con las idas y venidas de ciertas personas á la residencia real.

Se decía también que varios oficiales y aun jefes del ejército y altos funcionarios militares habían visitado al regente para repetirle su adhesión y concurso. Esto es, sin embargo, muy natural que sucediera por cortesía, con motivo del regreso de S. A. de tan larga expedición.

Se hablaba de la caída del gabinete y de la formación de otro nuevo, presidido por el brigadier Topete, con el elemento unionista.

Y se agregaba que el general Prim hacía protestas contundentes y propósitos decisivos.

Tanto y tanto se decía, con todo que á nuestro entender no había de positivo más que estarse hilvanando un remedio interino á la situación.»

Nos remitimos á lo que en otro lugar decimos acerca de los nuevos manejos unionistas en favor de la candidatura Montpensier. ¡Pobres progresistas!

En la madrugada de ayer falleció la señora doña Leocadia Gasset y Alberni, hija del Excmo. señor general D. Manuel Gasset. Acompañamos á su desconsolada familia en su justo dolor y sentimos en el alma que el cariñoso padre de la difunta no haya tenido el triste consuelo de acompañarla en sus últimos momentos.

Confiamos que el Señor recompensará como se merecen las virtudes de la finada.

La Iberia elogia á *La Epoca* por su actitud respecto al partido moderado.

Tenemos á la vista carta de una persona respetabilísima que reside en Manila, y su contenido no puede ser más desconsolador. La autoridad principal que allí manda es para dominar en aquellas islas lo más perjudicial que podía haberse elegido. Sus ideas disolventes en política están produciendo entre aquellos sencillos indios los efectos más desastrosos para nuestra dominación. Desde que se juró la Constitución en aquel suelo, se conspira á cara descubierta: la impolítica medida de lastimar al clero parroquial indígena, única parte ilustrada del país; las medidas encaminadas á disminuir el influjo de las órdenes religiosas que vienen con tanto acierto desde Legaspi y Salcedo, manteniendo y aumentando la fuerza moral de la influencia española en aquellas islas; son males que traerán, en un término no lejano, la pérdida para nuestra patria, de aquellas ricas posesiones. También nos dicen en la carta á que nos referimos, que los medios que se emplean para cobrar en las provincias la contribución de capitación no pueden ser más violentos y desastrosos y que los gobernadores están maltratados por los empleados que han ido nuevos. Sabemos que todo esto es *predicar en desierto*; pero bueno es que se sepa en España á quién se deberá en su día la pérdida de aquel archipiélago, pérdida que no será más que la consecuencia lógica y necesaria de la mala administración por que se rigen dichas islas.

Como anunciamos ayer, han sido destinados de cuartel á Canarias los brigadieres señores Seijas y Dole, los coroneles de estado mayor Sres. Estéban, Cortés y Febrer de la Torre, el coronel de infantería Sr. Bárbara y el de caballería Sr. Noguera. Si el cumplir exactamente con el espíritu y letra de las ordenanzas del ejército; si el no haber faltado jamás á sus deberes ni á sus obligaciones; si el haber derramado su sangre en los campos de batalla cumpliendo constantemente como buenos y leales con el juramento prestado á sus banderas, son motivos para proceder contra ellos, como se hace, nada tenemos que decir; pero si dichas cualidades no se pueden apreciar sino como un mérito relevante y distinguido, en este caso no podrá menos de convenirse por todo el mundo en que la medida adoptada es arbitraria, abusiva y de las censuradas con otros calificativos (que nosotros no nos permitimos), por los hombres que hoy están en el poder; cuando con ellos se tomaban análogas medidas, por ser notorio, público y probado que conspiraban contra la legalidad entonces existente.

Por segunda vez este gobierno ha dejado excedentes, por su caprichosa voluntad, á diversos jefes de cuerpos facultativos, que siempre se han regido por disposiciones especiales, entre las que figuran un escalafón cerrado y un presupuesto limitado á las necesidades de los distintos cuerpos, del que no es posible excederse sin gravamen del Tesoro, que es lo que ocasionará la medida adoptada, pues habrá que suplir las vacantes que estos dejan con otros oficiales, mientras que á ellos hay forzosamente que abonarles sus sueldos de cuartel ó de reemplazo.

Entre los beneméritos jefes deportados á Canarias, pues no otro nombre merece el

cuartel que se les ha dado para dichas islas, hay algunos que han desempeñado mandos políticos de importancia en otras situaciones, y posible es que el haber cumplido en ellos con fidelidad y consecuencia, sea otra de las causas que motive la indicada medida.

A la verdad, que si el gobierno se propone adoptar disposiciones análogas con todos los demás jefes y oficiales que se encuentran en el caso de los citados, larga, muy larga debe ser la lista que habrá que hacer, pues, para fortuna del ejército español, son muy contados los que no reúnen tan honrosas y distinguidas cualidades como los jefes que son ahora destinados á Canarias.

Ayer no quisimos hacernos cargo de ciertas palabras de *La Epoca* del día anterior, esperando que comprendería toda la significación que se le podría dar, y se apresuraría á rectificar, ó cuando menos, á modificar sus conceptos. La explicación no se ha hecho esperar: interpretadas aquellas palabras en cierto sentido por *La República Ibérica*, contesta *La Epoca* negando que hubiese querido hacer las maliciosas alusiones que gratuitamente dice atribuirle aquel periódico.

Desde luego tuvimos por infundadas las acusaciones de *La República Ibérica*; mas el hecho mismo de haberlas formulado convenecerá á *La Epoca* de la conveniencia de no aventurar frases y palabras que pueden dar motivo á interpretaciones como la que ha tenido que rectificar, sobre todo cuando se hace alarde de prudencia, de conciliación y de imparcialidad.

Hé aquí sus palabras:

«Prestar á los artículos de *La Epoca* la intención que tendrían los de un diario republicano al hablar de los moderados, y subrayar palabras que nosotros no hemos subrayado, porque no podíamos dadas la trascendencia que las da *La República Ibérica*, es en este periódico un rasgo de habilidad que podrá envidiarle el más hábil.

Si *La Epoca*, en el artículo de que aquel colega entresaca algunas frases, elogiándolas en términos que le agradecemos, he hablado de «edentes» y de «uñas», ha sido porque el símil que desarrollaba lo exigía; de ninguna manera porque pensase en hacer las maliciosas alusiones que *La República Ibérica* gratuitamente nos atribuye.»

Leemos en *La Política*:

«En los círculos moderados se da gran importancia al hecho de haber sido destinados de cuartel ó reemplazo á Canarias varios militares de marcadas opiniones políticas.

Estos militares son los brigadieres Sres. Seijas Lozano y Dole; los coroneles Estéban, de estado mayor, Bárbara, de infantería, Noguera, de caballería, y los tenientes coroneles de estado mayor, coroneles de ejército, Sres. Febrer y Cortés.

Por lo visto, el sistema *presentatio* no es solo propio de los moderados, sino que también lo aceptan los que tanto lo censuraron en otro tiempo.»

Efectivamente, mucho se habla estos días de la medida *ab-irato* tomada con esos militares leales y pundonorosos; pero no se habla solo en los círculos moderados, como supone nuestro colega, sino en todos los círculos donde se conserva aun una sombra de respeto á la ley y se reprueban las determinaciones arbitrarias é injustas.

Anoche, ó á primera hora de la mañana de hoy, ha debido llegar á Madrid el obispo del Burgo de Osma, acompañado de un comandante de la guardia civil.

Es preciso vivir en estos tiempos revolucionarios, en donde todas las ideas y todos los principios están conculcados, para presenciar hechos como el que dejamos referido.

En la ocasión oportuna, y con el detenimiento que merece, nos ocuparemos del grave asunto á que se refiere tan incalificable medida, que desde luego no podrá menos de impresionar dolorosamente á nuestros lectores.

El Certamen, periódico progresista, cuyas últimas horas deben ser muy del agrado de los unionistas, publica ayer la siguiente noticia:

«Ex el Consejo de anoche parece que se convino aplazar la crisis para la decisión del Congreso en la proposición del Sr. Morales Díaz, á pesar de que el Sr. Topete se obstinaba en que si no salía el Sr. Becerra, se saldría él del gabinete.

Los unionistas lanzan los problemas; el gabinete echa el muerto á los radicales; estos al ministerio, y los vicalvaristas barajan á su placer al ministerio y á los radicales, mientras el país sufre, calla y paga.

Los progresistas miran ya de reojo á los címbrios, y en esto D. Nicolás está altamente disgustado, y la única tabla en que podía salvarse la revolución, se marcha á fondo: solo los unionistas están contentos.

País, llegó el momento de terminar con tanta farsa y con tanto farsante: despierta.»

¿Con que había tantos farsantes entre los revolucionarios de Setiembre! ¡Vaya, vaya, que todos los días son días de aprender!

PARTE OFICIAL.

MINISTERIO DE HACIENDA.

LEY.

D. Francisco Serrano y Domínguez, Regente del reino por la voluntad de las Cortes soberanas; á todos los que las presentes vieren y entendieren, salud: Las Cortes Constituyentes de la nación española, en uso de su soberanía, decretan y sancionan lo siguiente:

Artículo 1.º Los gastos comprendidos en los presupuestos municipales y provinciales se cubrirán con ingresos independientes de los generales del Estado, y su repartimiento y recaudación se verificarán con arreglo á lo dispuesto en la presente ley.

Art. 2.º Los ingresos serán:

1.º Rentas y productos procedentes de bienes, derechos ó capitales que por cualquier concepto pertenezcan al municipio ó á la provincia, ó á los establecimientos de beneficencia, instrucción y otros análogos que de aquellas dependan.

2.º Arbitrios ó impuestos municipales sobre determinados servicios, obras ó industrias, así como los aprovechamientos de policía urbana y rural, y multas é indemnizaciones por infracción de las ordenanzas municipales y bandos de policía.

3.º Un repartimiento general entre todos los vecinos y hacendados, en razón de los medios ó facultades de cada uno, para cubrir los servicios municipales en la totalidad ó en la parte á que no alcancen los anteriores recursos.

4.º Impuestos sobre artículos de comer, beber y arder, de producción nacional, cuando por circunstancias especiales de la localidad la recaudación ó distribución del repartimiento ofreciese dificultades graves ó no pudiese cubrir la totalidad de los gastos presupuestados.

Art. 3.º Solo será autorizado el establecimiento de arbitrios sobre aquellas obras ó servicios costeados por los fondos municipales ó por aprovechamiento no se efectúe por el común de vecinos, sino por personas ó clases determinadas, siempre que los interesados no le hayan adquirido anteriormente por título oneroso, así como sobre industrias que se ejerzan en la vía pública ó en terrenos y propiedades del pueblo; entendiéndose que el ayuntamiento no podrá atribuirse monopolio ni privilegio alguno sobre aquellos servicios sino en lo que sea necesario para la salubridad pública.

Art. 4.º En conformidad á lo dispuesto en el artículo anterior, puede autorizarse el establecimiento de arbitrios sobre los objetos siguientes:

Aprovechamiento y abastecimiento de aguas para usos privados.
Alcantarillado.
Establecimientos balnearios en aguas públicas.
Guardia rural.
Establecimientos de enseñanza secundaria, superior ó especial.
Licencias para construcción de edificios.
Mataderos.
Puestos públicos y sillas en plazas, calles, ferias, mercados y paseos.
Alquiler de pesas y medidas.
Almacenamiento ó reposo.
Enterramientos en los cementerios municipales.
Coches de plaza y de servicios funerarios. Carros de transporte en el interior de las poblaciones.
Expedición de certificaciones por actos del ayuntamiento ó documentos que existan en sus archivos.
Parte que concedan las leyes en la expedición de documentos de vigilancia, licencias de caza y pesca, y de navegación y flete de los ríos y aprovechamiento de aguas.

Y los demás análogos.

Art. 5.º En ningún caso pueden ser objeto de arbitrios los servicios siguientes:

Aprovechamiento y abastecimiento de aguas para uso comunal.
Alumbrado público.
Aceras y empedrados.
Vigilancia pública.
Beneficencia.
Instrucción pública elemental.
Limpieza, sin perjuicio de los aprovechamientos á que diere lugar.

Y otros de igual naturaleza.

Art. 6.º Por excepción se autoriza la creación de arbitrios sobre la venta de bebidas espirituosas ó fermentadas, bien sea en establecimientos ó puestos fijos, ó bien por mercados ambulantes, tragineros, ó por los mismos cosecheros ó fabricantes; sobre los cafés, fondas, botillerías, posadas-hospederías y otros establecimientos del mismo carácter; sobre casas de baños; sobre toda clase de espectáculos públicos, y sobre juegos permitidos y rifas en la parte que las leyes concedan á los ayuntamientos.

Art. 7.º Los arbitrios expresados en el artículo anterior, salvo los relativos á casas de baños, espectáculos públicos, juegos y rifas, no serán autorizados en caso de existir los impuestos de consumos; pero los establecimientos enumerados pueden ser en todo caso objeto de un arbitrio especial por razón de vigilancia que no exceda del 5 por 100 de la cuota con que contribuyan al Estado.

Art. 8.º Los arbitrios sobre industrias que se ejerzan en la vía pública no existirán cumulativamente con el repartimiento general, sin perjuicio de lo cual las cuotas que por este concepto correspondan á las industriales pueden ser recargadas con un 5 por 100 por razón de arriendo ó uso de la vía.

Art. 9.º Las cuotas que se impongan á las industrias mencionadas en esta ley, que se hallen incluidas en las tarifas de la contribución industrial correspondiente al Estado, no excederán del 25 por 100 de la cantidad señalada en estas.

Art. 10.º El pago de multas é indemnizaciones tendrá lugar en un papel especial que la Hacienda emitirá para el caso, entregándolo á los ayuntamientos que lo soliciten, y cobrando sobre él por razón de sello un derecho que no exceda del 10 por 100 de su valor.

Art. 11.º El repartimiento general comprenderá á todos los vecinos del distrito municipal, siendo para el efecto considerados como tales los hacendados, forasteros con casa abierta, y labor ó industria por su cuenta.

Tanto unos como otros contribuirán solamente por lo que corresponda á las utilidades que tengan en el pueblo, sea cual fuere su naturaleza. A los hacendados forasteros sin casa abierta en el distrito no se les impondrá sino con relación á las dos terceras partes de estas utilidades.

Las que procedan de pensiones, intereses de capitales, sueldos ó rentas públicas serán imputadas á sus poseedores en el pueblo donde residan.

Quedan exceptuados del repartimiento los pobres de solemnidad, los acogidos en los establecimientos de beneficencia y las clases de tropa de tierra y mar.

Art. 12.º Para fijar la utilidad imponible de cada contribuyente, se procederá con arreglo á las siguientes bases:

1.º A los propietarios, empleados y rentistas que perciban rentas, sueldos, pensiones, censos ó intereses de cualquier clase ó procedencia, se les valorará como utilidad líquida el importe de estas sumas.

2.º A los colonos ó arrendatarios de fincas rústicas se les imputará una suma igual á la mitad de la renta que paguen. A los que labren sus propias fincas se les impondrá en razón á vez y media el importe de la renta que aquellas pudieran producir según los tipos medios del pueblo.

3.º A los comerciantes, industriales y demás comprendidos en las tarifas de la contribución industrial, se les valorará la utilidad imponible en proporción á la cuota que por este concepto satisfagan al Estado, no bajando de 5 ni excediendo de 20 veces el importe de la misma cuota, con arreglo á las escalas que, según la naturaleza de cada industria determine el gobierno.

4.º Los jornaleros ó braceros, y en general todos los que vivan de un salario eventual, contribuirán en razón de la tercera parte de la suma á que, según costumbre de cada localidad, pueda alcanzar por término medio su haber durante el año.

5.º Cuando no sea posible conocer la utilidad de algún vecino, se hará la evaluación, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 11, teniendo en cuenta los signos exteriores de riqueza, tales como el valor del mueble, alquiler de la casa, número de criados y otros análogos.

6.º De la utilidad valorada á cada vecino ó hacendado se deducirá en todo caso el importe de la contribución directa que pague al Estado.

Art. 13.º La determinación de la utilidad imponible se verificará por los mismos contribuyentes, reunidos por secciones en la forma que en esta ley se dispone. Cada sección formará una relación que comprenda las utilidades de todos sus individuos, procurando especificar en lo posible la naturaleza y número de los objetos que las producen.

Art. 14.º Los individuos de cada sección designados por el sorteo, procediendo como síndicos y reunidos con el ayuntamiento, examinarán y comprobarán estas relaciones, resolviendo las reclamaciones á que dieren lugar y fijando la cantidad total imponible. La junta re-

partirá lo que á cada sección corresponda, bien sea por el tanto por 100 proporcional á la utilidad total valorada, ó por categorías fijas.

Art. 15.º Los síndicos de cada sección verificarán y comunicarán el repartimiento á los individuos de la misma. El ayuntamiento resolverá las reclamaciones á que este repartimiento diere lugar.

Art. 16.º Todas las operaciones de evaluación y repartimiento serán publicadas en la forma ordinaria, comunicándose además en la secretaría del ayuntamiento á todo interesado que lo solicitare.

Art. 17.º Contra las decisiones del ayuntamiento y de la junta de evaluación se establece recurso de agravios para ante la diputación provincial. El recurso habrá de entablarse dentro de 15 días siguientes á la publicación, y no obstará para el pago de la cuota repartida interin no recaiga resolución definitiva.

Tanto estas reclamaciones como las que intenten por las operaciones de cada sección habrán de fundarse en hechos concretos precisos y determinados, aduciendo las pruebas necesarias para su justificación.

Art. 18.º El repartimiento comprenderá un tanto de aumento que no exceda del 6 por 100 de la cuota total para gastos de distribución, cobranza y partidas fallidas; quedando exentos del pago de este aumento los contribuyentes que satisfagan anticipadamente sus cuotas por trimestres, semestres ó anualidades en las depositarias de las respectivas municipalidades, y abonándoles en el segundo y tercer caso el tanto por 100 anual que se fije por razón del anticipo.

Art. 19.º El ayuntamiento y asociados reunidos en junta determinarán las especies que han de ser objeto del impuesto de consumos, así como las tarifas por que se ha de regir su exacción, y forma en que esta haya de tener lugar.

Las tarifas no excederán en ningún caso del 25 por 100 del precio medio del artículo en la localidad respectiva.

Art. 20.º El acuerdo del ayuntamiento y asociados será ejecutivo, sin perjuicio de los recursos á que según la presente ley hubiere lugar.

De este acuerdo se pasará al gobierno, por conducto del gobernador, una copia autorizada á fin de que pueda tener efecto la inspección ordenada por el párrafo quinto del art. 99 de la Constitución.

Art. 21.º Los impuestos de consumos solo serán autorizados sobre los frutos y bebidas que se consuman en cada pueblo, quedando absolutamente prohibido sobre ellos y todos los demás cualquiera otro impuesto que embarace el tráfico, circulación y venta, sean cuales fueren los nombres con que se estableciese, como derechos de piso ó tránsito, venta ó alcabala ó otro semejante.

Art. 22.º Se concede recurso de agravios á todos los interesados para ante la diputación provincial cuando las cuotas señaladas á los arbitrios ó impuestos de toda clase no guarden relación con la importancia del servicio, industria ú objeto á que se apliquen, ó con los demás establecidos en el pueblo.

Estos recursos y cualesquiera otros que puedan tener lugar serán formulados ante el alcalde respectivo, el cual, bajo su personal responsabilidad, queda obligado á remitir la instancia por conducto del gobernador de la provincia en término de ocho días con los informes que crea necesarios.

Art. 23.º Las diputaciones provinciales repartirán entre todos los ayuntamientos la parte que á cada uno corresponda en el presupuesto de la provincia, según el importe de lo que por contribuciones directas paguen al Tesoro. Esta cuota será incluida en el presupuesto de cada pueblo, y su importe íntegro ingresará en las depositarias provinciales en las épocas de recaudación ordinaria, ó antes si voluntariamente lo entregan los ayuntamientos.

Art. 24.º Además de los recursos administrativos establecidos por la presente ley, cualquier vecino ó hacendado del pueblo tiene acción ante los tribunales de justicia para denunciar y perseguir criminalmente á los alcaldes, concejales y asociados, siempre que en el establecimiento, distribución y recaudación de los arbitrios é impuestos se hayan hecho culpables de fraude ó de exacciones ilegales, y muy especialmente en los casos siguientes:

1.º Si cualquiera de los concejales y asociados en el año en que lo son pagan una cuota menor por repartimiento, impuesto ó licencia, comparado con el año anterior al desempeño de su cargo, siendo igual ó superior la cantidad total repartible, á menos que probare haber sufrido en su riqueza disminución que justificare aquella baja.

2.º Cuando el producto total de los repartimientos y arbitrios distribuidos excediese de la cantidad presupuesta y 6 por 100 de recargo autorizado por el art. 18 de esta ley.

3.º Cuando las cuotas determinadas para los arbitrios fuesen superiores á lo que la ley permite.

4.º Cuando establecieren y recaudaren cualquiera clase de impuesto no comprendido en la presente ley.

Los tribunales de justicia, una vez probado el hecho y sin perjuicio de lo dispuesto en el Código penal, harán las declaraciones siguientes:

Primer caso. Imposición de doble cuota á los culpables.

Segundo y tercer caso. Anulación del repartimiento en lo que exceda de la cantidad autorizada y devolución de las recaudadas, con multa igual al sobrante mancomunadamente imputada á los concejales y asociados culpables.

Cuarto caso. Anulación del arbitrio ó impuesto y devolución de las cantidades recaudadas, con multa igual á su importe, exigida en la forma expresada en el caso anterior.

Art. 25.º La junta de asociados, que en unión del ayuntamiento arregla y decide, según esta ley, todo lo relativo al establecimiento y distribución de arbitrios municipales, se compone de vocales en triple número que el de concejales designados entre los contribuyentes del distrito.

En los pueblos menores de 800 habitantes serán asociados para este efecto todos los vecinos contribuyentes.

Art. 26.º Pueden ser designados para este objeto todos los vecinos que hayan de contribuir por repartimiento á sufragar las cargas municipales, y donde no hubiere repartimiento los que paguen contribución directa al Estado.

Quedan, sin embargo, exceptuados los que no tengan capacidad para ser concejales; los que lo sean en la actualidad, y sus asociados y parientes dentro del cuarto grado, y los empleados y dependientes del ayuntamiento.

En los pueblos que no excedan de 2,000 habitantes la exclusión por parentesco se limitará al segundo grado.

Art. 27.º La designación se hará por sorteo entre los contribuyentes repartidos en secciones en conformidad á las reglas siguientes:

1.º El número de secciones será determinado por el ayuntamiento en conformidad al vecindario del pueblo y á la cuantía y clases de riqueza del mismo, no siendo en ningún caso menor que el de la tercera parte de concejales.

2.º Ingresarán en cada sección los vecinos y hacendados cuya profesión ó industria tenga entre sí más analogía, con arreglo á las agrupaciones y clasificaciones para el pago de las contribuciones directas, de suerte que los individuos de una misma clase contributiva no formen parte de secciones diferentes. Los vecinos que contribuyan por más de un concepto ó acumulen dos ó más industrias ingresarán en una sola sección, á su elección.

3.ª En las poblaciones donde la especialización de clases no sea practicable, por ser uniforme el concepto contributivo de sus habitantes ó no tener ramos industriales cuya importancia exija la formación de una sección, el repartimiento de estas tendrá lugar por calles, barrios ó parroquias.

Este mismo se verificará cuando alguna de las secciones formadas en conformidad á la regla anterior resultare demasiado numerosa.

4.ª A cada sección se designará el número de vocales ó asociados que correspondan en proporción al importe de las contribuciones que paguen todos sus individuos.

Art. 28. El ayuntamiento publicará el resultado de la formación de secciones, contra el cual puede reclamar cualquier interesado para ante la diputación en término de ocho días.

Art. 29. Ultimada la formación de secciones, el ayuntamiento, en sesión pública anunciada con dos días de anticipación en la forma ordinaria, y una hora antes en el mismo día, á toque de campana, procederá al sorteo de los asociados entre las secciones, haciendo inmediatamente publicar el resultado.

Art. 30. Si por el sorteo fuese elegido un hacendado forastero, será representado por quien en debida forma obtenga autorización para ello. En igual forma serán representadas las mujeres. La autorización puede constar en documento privado, garantizado por dos vecinos del pueblo.

Los menores é incapacitados serán representados por sus tutores ó curadores.

Art. 31. El ayuntamiento admitirá y resolverá en término de ocho días las excusas y oposiciones, procediendo á nuevo sorteo si hubiere lugar, sin perjuicio del recurso de alzada para ante la diputación provincial.

Art. 32. El ayuntamiento y asociados reunidos en junta general fijarán definitivamente el presupuesto, y acordarán los arbitrios á propuesta de aquel.

Art. 33. La junta tendrá lugar, previa citación personal y anuncio, en los plazos y forma señalada en el art. 29.

Art. 34. Para formar acuerdo es necesario el voto de la mayoría absoluta del total de voces que componen la junta. Si no se reúne este número en la primera sesión, se procederá á nueva convocatoria para ocho días después, y en ella formará acuerdo la mayoría de los concurrentes.

En los pueblos menores de 800 habitantes formará acuerdo el voto de la mitad más uno de los concurrentes, si estos llegan á la cuarta parte por lo menos del número total de vecinos que tengan derecho á componer la junta. En caso de no reunirse este número, se procederá con arreglo á lo dispuesto en el párrafo anterior.

Art. 35. Los acuerdos de la junta, salvo lo en contrario dispuesto por esta ley, son apelables para ante la diputación provincial cuando por ellos se infringe alguna de sus disposiciones, pero solo en la parte por la cual se hubiese cometido la infracción.

Art. 36. Para hacer efectiva la reanudación serán aplicables los medios de apremio en primeros y segundos contribuyentes dictados en favor del Estado.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Primera. Los ayuntamientos que hayan pagado las cuotas que les fueron señaladas en el repartimiento del impuesto personal dispondrán desde luego de los recargos municipales sobre las contribuciones territorial y de subsidio.

Los ayuntamientos que estén en descubierta del todo ó parte de dicho impuesto lo cubrirán con los intereses ó cupones de las inscripciones y bonos del Tesoro: en su defecto con los recargos municipales de las indicadas contribuciones, y en el último término con los arbitrios ó medios que, acordados por la municipalidad y triple número de contribuyentes, hayan obtenido la aprobación de la diputación provincial. Esta aprobación se entenderá otorgada si en el término de 15 días no se hubiere denegado.

Las diputaciones provinciales continuarán percibiendo los recargos provinciales sobre las contribuciones territorial y de subsidio.

Estas disposiciones regirán desde luego y hasta fin del presente año económico, desde cuya fecha se estará á lo que se establezca en el presupuesto de ingresos pendiente hoy de la aprobación de las Cortes.

Segunda. Las disposiciones de esta ley formarán parte integrante de las orgánicas municipal y provincial en los capítulos correspondientes.

DISPOSICION GENERAL.

El ministro de la Gobernación dictará los reglamentos necesarios para el cumplimiento y ejecución de esta ley.

De acuerdo de las Cortes Constituyentes se comunicará al regente del reino para su promulgación como ley. Palacio de las Cortes diez y siete de Febrero de mil ochocientos setenta.—Manuel Ruiz Zorrilla, presidente.—Manuel de Llano y Pérsi, diputado secretario.—El marqués de Sardoal, diputado secretario.—Julian Sanchez Ruano, diputado secretario.—Francisco Javier Carratalá, diputado secretario.

Por tanto: Mando á todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas de cualquier clase y dignidad, que lo guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar en todas sus partes.

Madrid veintiseis de Febrero de mil ochocientos setenta.—Francisco Serrano.—El ministro de Hacienda, Laureano Figuerola.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

DECRETO.

En cumplimiento de la ley de 9 de Diciembre próximo pasado disponiendo se proceda á cubrir las vacantes de diputados que resulten y puedan resultar durante las actuales Cortes, aun cuando no se hallen en el caso que previene el art. 19 del decreto sobre ejercicio del sufragio universal, y teniendo presente lo que determinan los artículos 20, 21, 109 y 115 del mismo.

Vengo en decretar lo siguiente: Artículo 1.º Se convoca á los colegios electorales de la circunscripción de Astorga, provincia de Leon, para que procedan á la elección parcial de un diputado á Cortes.

Art. 2.º La elección dará principio el día 17 de Marzo próximo, y continuará en los tres siguientes; el segundo escrutinio se verificará el día 23, y el tercero el general el 31 del mismo mes.

Dado en Madrid á veintidos de Febrero de mil ochocientos setenta.—Francisco Serrano.—El ministro de la Gobernación, Nicolás María Rivero.

REVISTA DE LA PRENSA.

La *Política* publica un artículo con el epígrafe de *voz popular*, en el que explica como lógico y natural el grito de los millares de trabajadores, que piden pan, porque gracias á la revolución se mueren de hambre, y no pueden digerir la libertad como la entienden los setembrinos.

Copiamos de él los siguientes párrafos, que no dejan de encerrar una triste verdad:

«El pueblo, el verdadero pueblo, las clases sin capital, pero que viven de su trabajo y no saben ni quieren vivir de otra manera, los obreros de la ciudad y los trabajadores del campo, los peones de las obras públicas y particulares (cuando las había), los artesanos al por

menor, se han reunido estos días en Madrid, y, con un admirable buen sentido, de que no han podido apartar los políticos de oficio, los enemigos de todo orden, los amantes y explotadores del bullicio, los holgazanes, los codiciosos, los rapaces, las gentes sin hogar, ni costumbres, ni familia, han pedido con una gran moderación, no ya libertad, que era lo que hasta aquí pedían, sino trabajo.

Pero la libertad no ha venido á nuestro país en esa forma ordenada y armónica; los gobernantes, aunque animados del mejor deseo, no han estado á la altura de su misión; los gobernados se han quedado mucho más por debajo de la suya; la revolución ha consignado todos los derechos, pero no ha respetado algunos, y ha dejado de exigir casi todas las obligaciones que á esos derechos son inherentes; ha habido libertad, pero no ha habido orden; se han procurado medios á la actividad humana, pero se ha dejado de inspirar la confianza necesaria para asegurar su ejercicio; la tiranía, que antes residía arriba, ha residido con frecuencia abajo y, como consecuencia de todo esto, han continuado paralizadas las obras públicas y las particulares, hundido el crédito, muerta la industria, arruinado el comercio, retraído el capital, y la Hacienda pública en mayores apuros, y el pobre pueblo en mayor miseria que antes de la revolución.

Después de estas y otras consideraciones deduce *La Política*, que lo que hace falta para consolidar aquí un regular orden de cosas es un rey. Puede que nuestro colega tenga razón.

Pero ¿es el rey de *La Política* el que el pueblo quiere? ¿A que no!...

El *Tiempo* se ocupa del lamentable estado de los ingresos públicos después de la revolución, que solo ha conseguido desorganizarlos todo.

La *Iberia* da el alerta á las clases obreras, suponiendo que el carlismo es el que promovió las manifestaciones de los trabajadores y que prepara otras en diferentes provincias.

No es nuestra misión la de defender al carlismo; pero se nos ocurre una pregunta, que deseáramos ver contestada por *La Iberia*.

«¿Es también el carlismo el que ha inventado y preparado y hoy está sosteniendo el hambre y la miseria que devora á las clases obreras?»

En los demás periódicos ninguna otra cosa encontramos que inspire gran interés, ocupándose muchos de ellos de la larga crisis que trabaja al gabinete y á la situación, y de la próxima ruptura de la conciliación.

SECCION DE NOTICIAS.

En el día de hoy, desde las diez de la mañana á las dos de la tarde, satisfará la Caja general de depósitos los intereses por depósitos en metálico, existentes en la misma, y cuyas carpetas de señalamiento lleven los números del 2,301 al 2,350 inclusive.

En el propio día y á la propia hora satisfará la Tesorería central el cupon vencido en 31 de Diciembre último, cuyas carpetas se hallen señaladas con los números 894 al 918.

La misma Tesorería central satisfará á las mismas horas y en el día de hoy, los bonos del Tesoro amortizados en 30 de Diciembre último, cuyas carpetas se hallen señaladas con los números 91, 92 y 93.

La *Gaceta* de ayer publica el siguiente anuncio del Banco de España:

«Habiéndose cobrado de las oficinas de la Deuda pública los intereses vencidos de acciones de obras públicas, se avisa á los interesados en depósitos de esta clase de efectos, para que puedan presentarse en este establecimiento á percibir el importe de dichos intereses desde el 24 del corriente, á las horas de despacho.»

La junta de la Deuda pública ha acordado que en el día de hoy, á la una de la tarde, se verifique en el patio principal del edificio que ocupan sus oficinas la pema de los documentos de la Deuda pública, amortizados por pago de débitos y conversiones, y de los cupones de todas clases de rentas y vencimientos que han sido satisfechos por la tesorería de dicho establecimiento en los meses de Enero á Junio de 1869.

Habiendo visto anunciada por la prensa en general *Las Tablas cronológicas del P. Clemente*, corregidas y aumentadas por el Sr. D. Ivo de la Cortina, con el epígrafe de *Cronica general de España* hasta nuestros días; debiendo á la consideración del autor, nos remita las cinco primeras entregas que lleva publicadas. Es muy justo que digamos que, en su género, como prontuario de nuestra historia en extracto, llamando por orden de fechas al margen, después de dividir las épocas y de darnos con buenas litografías los retratos de los personajes célebres: merece ser estimado y buscado por los hombres de estudio; por los bibliófilos, y en especial por los preceptores de instrucción pública. Felicitamos por su buen trabajo y pensamiento al autor, dedicado hoy á una clase de literatura, tan escasa como útil.

Varios periódicos han anunciado que la comisión de comandantes voluntarios y de concejales encargada de formular el reglamento de la Milicia nacional, respetando los batallones existentes, que se conservarán, ha consignado el principio del servicio forzoso.

Tal vez este acuerdo haya dado lugar á la noticia que corría hoy bastante acreditada, de que el Sr. Rivero trata de establecer en el ministerio de la Gobernación un centro directivo para la reorganización de las fuerzas populares de España.

Se ha aumentado la guardia de voluntarios de la Plaza Mayor, por disposición del alcalde primero de Madrid.

Se supone que esta medida tenga alguna relación con la manifestación de los obreros.

En los círculos políticos se ha dado esta tarde cierta importancia á una visita que el presidente del Consejo hizo esta mañana á las diez al señor ministro de Hacienda en su departamento.

Dice *La Regeneración*: «Continúan las gracias.

Un periódico de anoche dice que se ha concedido la gran cruz de Isabel la Católica al mariscal de campo D. Rafael Clavijo, al Sr. D. Antonio María Vazquez y al Sr. D. Antonio Mogollón.

Tendremos gusto en sumar el número de cruces concedidas desde 1.º de Octubre de 1868 por estos decretos y gracias señores.

En esto es en lo que ha prosperado el comercio, en la venta de cruces, bandas y placas.

Mañana saldrá para Cataluña el batallón de cazadores de Figueras, acantonado en Alcalá de Henares.

SECCION DE PROVINCIAS.

Segun escriben de Falset al *Diario de Reus*, aquella villa había sido teatro de serios altercados originados por la negativa de los revendedores de artículos en aceptar la calderilla decimal. La autoridad local, con objeto de terminar aquellas escenas desagradables, había publicado un bando declarando calderilla la moneda.

En Jerez se están haciendo grandes esfuerzos para conjurar la crisis que ha surgido allí con motivo de la situación angustiosa de las clases jornaleras por falta de trabajo, y que ha dado ya lugar á conatos de disturbios. La suscripción abierta para proporcionar recursos periódicamente á fin de atender á esta calamidad asciende hasta ahora á 21,369 rs., sin contar 1,450 rs. que se han suscrito por una sola cantidad.

Las carreras de caballos que debían verificarse este mes en Jerez no se verificarán ya hasta los primeros días de Marzo.

Dice un periódico de Valencia de anteayer: «Es lastimoso que la aflicta situación en que se hallan colocadas las clases pasivas, haga creíble el siguiente relato de uno de nuestros colegas:

«Se nos ha referido que el sábado, á las diez de la mañana, se presentaron dos ó tres niños débilmente vestidos en un campo de las inmediaciones de esta capital, aporreados y comiendo algunas zanahorias; lo cual, visto por el dueño, les repudió agramente; pero las infelices criaturas se echaron á llorar, diciendo que tenían hambre, y que eran hijos de un oficial retirado, á quien el gobierno no pagaba, y no podía por tanto mantener á su familia.

El honrado labrador, enternecido, les entregó algunos comestibles, retirándose los niños más consolados. Excmos. comentarios.»

El mismo periódico publica el hecho siguiente: «Son bastante frecuentes en nuestro país, en estos tiempos de desorden, las venganzas cobardes que deberían estar limitadas á las tierras del Riff. En Canals tuvo lugar una de ellas hace algunos días, talándose en un campo nada ménos que 2,500 moreros y varias hijueras, y destruyendo con ello una preciosa riqueza. La propiedad está por desgracia sobrado desatendida en el campo, donde una mano aleva puede, casi impunemente, destruir los árboles que forman el bienestar de una familia.

Leemos en un periódico de Málaga: «Hace algunos días refirió uno de nuestros colegas locales que se había presentado al señor gobernador un militar retirado solicitando licencia para pedir limosna, por haberle reducido á tal miseria la prolongada falta de pagas. Hoy se nos cuenta que uno de estos últimos días, hallándose en la plaza de Riego varios ancianos oficiales que se hallan en igual situación, uno de ellos se quejaba con sus compañeros de no haber encendido la candela en su casa en tres días, y que, compadecido al escucharlo un honrado artesano, que ocupaba un asiento inmediato, se le acercó, y le ofreció generosamente partir con él la escasa cantidad que poseía; rasgo noble y delicado, que no pudo menos de arrancar lágrimas á los circunstantes.

Las clases pasivas aún no han cobrado en Málaga la paga del mes de Noviembre del año pasado.»

SECCION EXTRANJERA.

Estábamos en lo cierto, cuando al ocuparnos ayer del discurso de M. Jules Favre, cuyo extracto nos había transmitido el telégrafo, llamábamos la atención de nuestros lectores, sobre la actitud, hasta cierto punto benévola para con el ministerio, en que se había colocado el eminente orador republicano, y señalábamos la inmensa distancia que había entre su peroración y los vehementes apóstrofes de los diputados irrecconciliables. El siguiente párrafo de su discurso, acogido con aplausos casi unánimes, aunque no sin evidentes muestras de sorpresa, prueba de una manera concluyente la exactitud de nuestra apreciación:

«Nada hay preferible, decía el ilustre orador, á una revolución pacífica, y vale más una libertad almitida y progresiva que la que se alcanza en medio de las tormentas, porque á esta acompañan muy á menudo repentinas y crueles reacciones.»

La *France* juzga del mismo modo que nosotros el discurso de Favre, y establece un curioso paralelo entre la actitud de este y la que tenía hace cinco años M. Emile Ollivier, cuando rompió con la izquierda y hacia exclamar á M. Thiers: «No se son solo sus naves las que quema, incendia toda la flota.» M. Jules Favre no ha ido tan lejos: su actitud no es tan clara ni tan resuelta como lo fué en aquella época la del actual ministro de la justicia, pero la verdad es que se ha colocado tan lejos de M. Gambetta, como se colocó respecto de él el antiguo individuo de los cinco, después de la discusión de la ley sobre coaliciones. A Ollivier le reemplazó Favre; á Favre le sustituye Gambetta, y para que la identidad sea mayor, Favre protesta que no aspira á ser ministro con la misma sinceridad con que protestaba entonces Ollivier.

El imperio gana con todas estas evoluciones, porque cuando se oye decir á un orador republicano, «que el gobierno imperial se estableció sobre la ruina de todas las libertades, excepto la libertad electoral, el sufragio universal, y más adelante, en esto ha hecho un acto lógico pero salvador», no puede desconocerse que la opinión pública va haciendo justicia á la política de Napoleón III, y que no se la escatiman ni aún los que hasta hoy fueron sus implacables enemigos.

Todo lo que nos dicen los periódicos extranjeros sobre reuniones del centro derecho y del centro izquierdo, sobre órdenes del día más ó menos favorables á la política del ministerio, discutidas en unas y otras y sobre fraccionamiento de la mayoría, carece de interés después que el telégrafo nos ha transmitido la noticia del señalado triunfo parlamentario alcanzado por el gabinete Ollivier-Daru.

También se ha verificado una reacción saludable en las opiniones de algunos periódicos, y buena prueba de ello es el siguiente párrafo del *Diario de los Debates*, que venía abogando resueltamente por la disolución del Cuerpo legislativo: «No sabemos, dice, lo que ganaría el partido liberal con unas nuevas elecciones. El terreno no está bastante preparado. No tomaremos en cuenta la agitación, quizás el desorden en que sumirían al país tan repetidos experimentos. Después de todo, no nos pesaría la agitación si fuese fecunda, si produjese algún bien, aunque fuese á mucha costa; pero creemos que en el estado actual de la opinión, y sobre todo de la administración, unas nuevas elecciones serían estériles.»

El trabajo de verificación y de liquidación, emprendido por M. Chevreau para poner en claro la situación financiera de la villa de París, puede considerarse terminado. Parece que será necesario un nuevo empréstito de 250 millones de francos para salvar los atrasos y proseguir las obras comenzadas.

El trabajo de verificación y de liquidación, emprendido por M. Chevreau para poner en claro la situación financiera de la villa de París, puede considerarse terminado. Parece que será necesario un nuevo empréstito de 250 millones de francos para salvar los atrasos y proseguir las obras comenzadas.

El Sr. BUENO, como de la comisión, empieza á contestar al discurso del Sr. Monterola, consumiendo el tercer turno en contra del voto particular. Dice que hay que tener en cuenta que mueve la cruzada levantada

organización municipal de París, ha resultado dos puntos importantes: primero, que el consejo municipal sea electivo; segundo, que la residencia en la capital, durante un período determinado, confiere el derecho electoral, aún á las personas no nacidas en París. La primera cuestión en que debe ocuparse la comisión es la de fijar las condiciones de domicilio exigibles para ser inscrito en la lista de electores municipales.

Tomamos del *Telégrafo* autógrafo las noticias siguientes:

«La familia imperial va á entrar muy pronto en esa época tan esperada de la mayor edad del príncipe. Sin embargo, el 16 de Marzo próximo, que es el día referido, será idéntico á los demás. Segun unos, el emperador espera esta fecha para asociar el príncipe imperial al imperio; segun otros, llegaría hasta el punto de arrojar la pesada carga del poder, haciendo proclamar á Napoleón IV emperador de los franceses por el ministerio de monseñor Ollivier. Esta noticia que ha circulado por algunos centros políticos, y que hasta se ha hecho eco de ella algun periódico de esta capital, la damos como un simple rumor y no respondemos, por consiguiente, de su autenticidad.»

Va á ser nombrado, segun una correspondencia de Munich, ministro de Negocios extranjeros el conde Brag, que fué el que en 1866, de acuerdo con el baron de Pfordten, firmó los tratados de Nícolsborg y la paz de Berlín: ignoramos, sin embargo, el fundamento que pueda tener esta noticia.

Se dice que los agentes de M. Bismark recorren en estos momentos el Hannover, y que su misión es procurarse una lista de las personas sospechosas. En la embajada desmienten terminantemente esta noticia.

La Cámara de los diputados sajones ha decidido suprimir, antes de que se vote el presupuesto de 1870 á 1871, las tasas adicionales sobre los inmuebles y sobre la industria. Esta medida ha sido muy bien recibida por la opinión.

Ha llegado á París, y hospedándose en el Grand-hotel, Casal Ribeiro, ministro de Portugal; el vizconde Lancastre Saldanha ha sido nombrado primer secretario en Florencia, y reemplazado en París por M. Souza Lobo.

Se asegura que en la actualidad son completamente cordiales las relaciones entre el sultan y el kediye. La puerta ha renunciado á que se le entreguen los fusiles Chassepot, en vista de haber hecho presente el virey que las armas de esta clase, últimamente adquiridas por él, están en proporción del efectivo ordinario de su ejército. Algunos maliciosos suponen que la penuria del Tesoro del sultan, agotado ya por el pago de los buques acorazados, ha sido parte á determinar aquel rasgo de generosidad.

Continúa la revolución en Méjico. Aun cuando aún no se sabe á punto fijo lo ocurrido en Puebla, Querétaro y San Luis de Potosí, parece fuera de duda que el pronunciamiento tiene grande importancia, y que á su frente está el general Francisco Aguirre: han dado su programa, en el que quieren: primero, hacer nuevas elecciones generales, quedando, mientras se realizan el país bajo el protectorado de un general; segundo, plantear la Constitución de 1857; tercero, abolir la pena de muerte por delitos políticos; cuarto, dar una amnistía en nombre de la nación, pero con ciertas excepciones; y quinto, asegurar, con preferencia á ninguna otra, la deuda que se contraiga para atender á los gastos de este movimiento.

CORTES CONSTITUYENTES.

Extracto de la sesión celebrada el día 24 de Febrero de 1870.

PRESIDENCIA DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE MARQUÉS DE PERALES.

Abierta la sesión á las tres y leída el acta de la anterior por el señor secretario marqués de Sardoal, fué aprobada.

Se dió cuenta del despacho ordinario, excoausando su falta de asistencia á la sesión los Sres. Diaz Quintero y Vidal, por estar enfermos.

Entróse en el orden del día, reanudando su discurso sobre el suplicatorio para procesar al arzobispo de Santiago, el Sr. Gonzalez (D. Venancio), como de la comisión.

Dicho señor insiste en que el señor arzobispo está comprendido, por su desobediencia, en el art. 304 del Código penal.

Dijo que había mucha diferencia entre los prelados que en 1862 fueron á Roma á la canonización de los Mártires y los que ahora han ido al Concilio ecuménico, por la manera respetuosa con que aquellos lo hicieron, en contraposición á como estos lo han hecho ahora.

El orador les varias comunicaciones del obispo de Urgel, en que dice se trata de insensato al gobierno, para probar que el arzobispo ha cometido el delito de desatado contra el mismo.

Cita una sesión de las Cortes de 1854, en que el señor Nocedal, dice, sostenía la misma doctrina que él sostiene respecto á los obispos.

Concluyó diciendo que las Cortes no pueden negar la autorización para procesar al arzobispo de Santiago en estos momentos, en que el obispo de Osma está produciendo un conflicto gravísimo en concepto de S. S.

El Sr. CISNEROS rectificó, insistiendo en los principales argumentos que adujo en su discurso en defensa del voto particular.

El Sr. Cisneros dice que creía se iba á juzgar al señor arzobispo de Santiago por sus actos, pero no por los actos ó faltas de otros, y por lo que hubiesen hecho otros eclesiásticos.

El Sr. GONZALEZ (D. Venancio) rectificó.

El Sr. MANTEROLA obtuvo la palabra en pró del voto particular, consumiendo el segundo turno, y dijo que el Consejo de Estado opinó que los tres prelados cuyas exposiciones pasaron á aquel tribunal, solo habían cometido una falta que merecía apercibimiento, en cuyo caso podían estar el arzobispo y los otros dos obispos.

Dice que el arzobispo solo ha cumplido con su deber, y recuerda con este motivo otro caso más fuerte de San Ambrosio con el emperador Valentiniano, en que aquel obispo no quiso cumplir un mandato de este.

Dice que no quiere un Estado dentro de otro, sino, por el contrario, firmaría una proposición para que ningún eclesiástico se mezclase en los asuntos civiles, con tal que los gobiernos no se mezclasen en los de la Iglesia, y la dejen en libertad, pues prefiere la libertad de la Iglesia, á verla sujeta por una arrolla de oro, que es á lo que equivalen los bienes de la desamortización.

Dice que antes de hacer libros á los hombres, es preciso hacerlos morales, y de paso combate la idea de la moral universal, nacida de la filosofía moderna, porque no es esta la moral que necesitan los pueblos, sino una moral tangible.

La base de esta moral, dice, es la religión católica, única posible hoy en España.

Dirigiéndose á los republicanos, les dice que son generosos y grandes, por lo cual no duda le ayuden en su tarea de defender al arzobispo de Santiago, que no es responsable de los infortunios de los partidos vencidos, cuyo ruego hace también á toda la Cámara.

El Sr. BUENO, como de la comisión, empieza á contestar al discurso del Sr. Monterola, consumiendo el tercer turno en contra del voto particular. Dice que hay que tener en cuenta que mueve la cruzada levantada

á favor de la Iglesia, y es preciso averiguar esta causa. Para probar la justicia con que se pide el proceso del arzobispo, recuerda que este verano se levantaron las partidas á docenas, algunas mandadas por eclesiásticos.

Respecto á la guerra que se dice hacen ahora al clero, lo cree tan lejoso de eso, que todavía no han tenido la ley de 1.º de Mayo de 1868.

Combate el número de sacerdotes, añadiendo que, mientras el pueblo se muere de hambre, no se hace el arreglo eclesiástico, sosteniendo el pecado de escándalo, pues ha hablado mucho y no ha hecho nada.

El orador pidió se suspendiese la discusión, y fué concedido.

Se leyó, revisado por la comisión de corrección de estilo, el proyecto de ley sobre la real orden condonando al marqués de Badmar lo que real orden condonando medias anatas, y fué aprobado definitivamente.

El Sr. VICEPRESIDENTE (García Gomez): Se suspende la sesión, que continuará á las nueve. —Ran las seis y media.

GACETILLAS.

Cero y van ill. Me han dicho que Figuerola, anda buscando dinero.—Que se lo den es lo raro, —que dilo, —y lo busco no es nuevo.—Dicen que anda apurándose—de cincuenta á más ó menos.—Se que urge tener más,—la mesa del presupuesto.—Salgamos de hoy, préstamo se acaba,—otro empréstito al colete.—Este es el tema obligado,—y todo el plan financiero,—de los hombres que han venido,—para desahogar entretantos.—Y al que no habrá quien la conozca,—cuando alcamos, manojos.—Dios se apade de nosotros,—y mande pronto el remedio,—que á tamaños males, solo—nos puede venir del cielo.

Un periódico de Milan refiere que ha visto un contrato para el teatro la Fenice, de Nápoles; el cual contrato es lo más ameno que pueda imaginarse. Basta decir que los artistas que deseen inscribirse para aquel teatro, han de obligarse:

á cantar;
á bailar;
á volar;
á despenarse;
y finalmente á CAMBIAR DE SEXO.

Desgracia. El célebre Hyacinthe, el excelente Hyacinthe, actor del Palais-Royal, se ha fracturado un brazo estando ensayando en el teatro del Casino de Mónaco.

Juana de Arco. En los primeros días de Marzo va á ponerse en escena en el teatro de la Opera Italiana, la ópera Juana de Arco, de Alfred Holmés.

Alhambra. Anoche se verificó el primer baile de máscaras en el salón de este nombre. El baile estuvo animadísimo. El salón está admirablemente adornado, y con un lujo que nos sorprende, atendido el poco tiempo que han tenido para decorarlo.

La orquesta nos hizo pasar un agradable rato, y nos dió á conocer piezas de música completamente nuevas en Madrid. Aconsejamos el distinguido director, señor Vilamala, siga con ese género de repertorio, que indudablemente llevará mucha gente.

A la empresa en general la enhorabuena.

Reunión semanal. Anoche se verificó en casa de la señora de Carvajal la 4.ª de la semana de los viernes, adelantándola un día á causa del baile que tendrá lugar hoy en los salones del Veloz-Club. La concurrencia fué numerosa y escogida, y la señora de la casa y sus bellas hijas hicieron los honores con la finura y amabilidad que las distingue.

Gran Peña. Anoche se verificó en esta sociedad de recreo el nombramiento de la junta directiva, saliendo elegidos los señores siguientes:

Presidente, Excmo Sr. D. Francisco Antonio de Elorza; directores, 1.º D. Fernando Camus; 2.º D. Mariano García; 3.º D. Pedro Dama; contador, D. José Rada; tesorero, D. José de Lafuente Hernandez; secretario, D. Pedro Meller; suplentes de directores, D. José Tamara, D. Manuel Gomez de Avellaneda, D. José Ruiz Moreno; suplentes de secretario, D. José Trillo Figueroa, D. Enrique Buella.

Concluido el escrutinio, se acordó por unanimidad dar un voto de gracias á la junta directiva saliente.

Ayer anticipamos á nuestros suscritores los siguientes despachos telegráficos:

Londres 23. Los ministros de España y Portugal han empezado negociaciones con el gobierno para mejorar las relaciones comerciales, y sobre todo para conseguir una reforma de los aranceles en la parte relativa á los derechos de entrada de los vinos. Cabrera sigue enfermo. París 23.

En la bolsa de hoy se han cotizado: El 3 por 100 interior español, á 22 1/8.

El 3 por 100 diferido id., á 26.

El 3 por